

APROXIMACION A LA CONFIGURACION POLITICA DE COLOMBIA

*Fernán E. González G.**

La formación del Estado Nacional y el temprano surgimiento del sistema bipartidista en Colombia han sido frecuentemente interpretados en términos de carácter formal: así, la aparición del Estado-Nación suele asociarse con la expresión de la unidad nacional en la centralizante constitución de 1886, complementada con una estrecha alianza del Estado con la Iglesia católica, que fue consagrada legalmente por el Concordato de 1887¹. La formación de los partidos políticos liberal y conservador ha sido analizada en términos de adhesión a una plataforma ideológica del partido respectivo, escrita generalmente en un estilo abstracto y general², o a un jefe o líder político, normalmente el jefe del partido o de una de las múltiples facciones en que éstos suelen estar divididos.

* Historiador y politólogo, investigador CINEP.

1 GONZALEZ, Fernán. "La Asamblea Constituyente: ¿Hacia la consolidación del Estado Nacional"?, *Controversia* No. 59-60, CINEP, Bogotá, 1977.

2 Este ha sido el enfoque normal que se ha popularizado a través de los tradicionales textos escolares, como los del P. Granados, el Hermano Justo Ramón y similares.

Más recientemente, se ha tratado de ligar estas adhesiones ideológicas o personales a la expresión de intereses socioeconómicos: así, los liberales expresarían a los comerciantes e industriales, mientras los conservadores serían los voceros de los sectores terratenientes tradicionales y de la Iglesia católica³.

I. Socialización política y su expresión ritual-simbólica

Aunque haya parte de verdad en estas explicaciones excesivamente simplificadoras, el cuadro completo exige considerar otros aspectos relacionados con la sociabilidad y socialización políticas y su expresión simbólica o ritual. La sociabilidad política se refiere a las redes de relaciones interpersonales que están en la base de las agrupaciones políticas: ¿cómo se relacionan entre sí los diversos miembros de los partidos? ¿Cuál es la relación que se establece entre un jefe político y sus seguidores? ¿Cómo se origina dicha relación? ¿Cómo se crean las relaciones políticas entre los jefes políticos regionales y los de carácter nacional? ¿Cómo se hace un líder regional o nacional? ¿Qué diferencias regionales aparecen en estos procesos de socialización política? ¿Cómo se relacionan estos procesos regionales con el nivel nacional? ¿Qué relación se produce entre estas relaciones y la participación de las elites regionales y locales en la burocracia regional y nacional? En una palabra, ¿cómo se relacionan los miembros de un grupo político en sus diversas instancias?⁴.

3. El primero en sostener tal enfoque fue Luis Eduardo Nieto Arzeta en su obra clásica, *Economía y Cultura en la Historia de Colombia* (1941). Más recientemente, su enfoque ha sido retomado en líneas generales por Charles Bergquist en *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910*, FAES, Medellín, 1981. Frank Safford ha hecho varios comentarios críticos sobre este tipo de análisis. Cfr. "Acerca de las interpretaciones socioeconómicas de la política en la Colombia del siglo XIX", en *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*, Nos. 13-14, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1985-1986.

4. DEAS, Malcolm. "La presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el siglo XIX de la República", en Palacios, Marco. *La unidad nacional en América*

Estas solidaridades sociopolíticas tienden a expresarse simbólica o ritualmente, que muestran la pertenencia a un grupo y la identificación con una especie de "COMUNIDAD IMAGINADA"⁵, a la que se supone pertenecer en grados diversos. Esta comunidad imaginaria tiende gradualmente a hacerse más y más real a medida que sus miembros van involucrándose en la actividad política concreta a través del voto, de la participación en la administración pública, de la participación en enfrentamientos o guerras civiles, de la consecución de beneficios personales o familiares a cambio de esa participación política.

Esta identidad colectiva puede expresarse en el seguimiento y la admiración de determinados personajes políticos actuales o pasados (Bolívar, Santander, Obando, Mosquera, Núñez, Uribe Uribe, Benjamín Herrera, López Pumarejo, Laureano Gómez, Gaitán, Ospina Pérez, etc.), que son idealizados y abstraídos de las circunstancias concretas de su época para convertirse en una especie de símbolos o mitos que expresan vitalmente la adhesión a una doctrina o conducta política, la pertenencia a una agrupación política⁶.

La cohesión interna de una agrupación política suele también expresarse en el juego contrapuesto de imágenes y contraimágenes que los grupos se forman, o sea, la manera como se ven a sí mismos y a sus adversarios. En los primeros años de la aparición de los partidos, los liberales se describen a sí mismos como los verdaderos republicanos y los amigos del progreso, mientras dibujan a los conservadores como "godos" (alusión a los partidarios de la dominación española) o "serviles" (seguidores de la "tiranía" de Bolívar y de la dicta-

Latina. Del regionalismo a la nacionalidad. El Colegio de México, México, 1983. Cfr. Las intervenciones de Palacios y Deas en la mesa redonda "Regiones y Naciones en el siglo XIX", publicado en *Aspectos polémicos de la historia del siglo XIX. Memoria de un seminario*, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1983.

5 Sobre el concepto de *Comunidad Imaginada*, Cfr. Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Editions, Londres, 1985.

6 DEAS, o.c.

dura de Urdaneta)⁷. Por su parte, los liberales son descritos por los conservadores como “rojos” y “libertinos”, semejantes a los revolucionarios socialistas de Francia, mientras se ven a sí mismos como la gente honesta y sensata de la nación⁸.

Además, es importante considerar también la relectura que hacen los políticos colombianos de los pensadores políticos extranjeros⁹, en la búsqueda de apoyo intelectual que refuerce la solidaridad política de la comunidad imaginada al proporcionarle un modelo de identidad a la propia agrupación política. Incluso, es importante la lectura que se hace de acontecimientos tales como la Revolución Francesa de 1848, que sirve de modelo y de contramodelo para los partidos colombianos.

Este énfasis en las redes interpersonales de solidaridad política y en su expresión simbólica tiene un presupuesto básico implícito: la falta o precariedad de una *base material* que unifique al país desde lo económico, que se debería expresar en un mercado nacional unificado, unas relaciones capitalistas generalizadas a lo largo del país, una estructura vial que comunique entre sí las diversas regiones de la nación, una burguesía nacional hegemónica que imponga su proyecto histórico¹⁰. La precariedad de todo esto tiene que ver con las vicisitudes de la integración de Colombia al mercado internacional, que será tardía y complicada; la difícil geografía coadyuva

7 MOLINA, Gerardo. *Las ideas liberales en Colombia*. Tomo I, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1970, págs. 17-18. Camacho Roldán, Salvador, *Memorias*. Ed. Bedout, Medellín, sin fecha, p. 10.

8 OSPINA RODRIGUEZ, Mariano. *Escritos económicos y políticos*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1969.

9 JARAMILLO URIBE, Jaime. *El pensamiento colombiano en el siglo XIX*, Ed. Temis, Bogotá, 1964.

10 OSZLAK, Oscar. “The historical formation of the State in Latin America. Some theoretical and methodological guidelines for its study”. *Latin American Research Review*, Vol. XVI, No. 2, 1981.

para complicar la integración del territorio nacional¹¹. Tampoco se ha dado un *consenso generalizado* a lo largo de nuestra historia que legitime plenamente nuestras instituciones nacionales, siempre sujetas a la eventual rebeldía de los disidentes y siempre víctimas del cuestionamiento de los excluidos de ellas. Estas carencias han llevado a privilegiar los aspectos de las redes de interrelación personal y de la expresión simbólica de la unidad nacional¹².

II. El papel de los partidos políticos

Las líneas de análisis antes sugeridas permiten una mejor intelección del proceso de construcción del Estado-Nación que pasa en Colombia por la formación temprana del sistema de dos partidos, conservador y liberal, que se constituyen en los mediadores tradicionales entre el Estado y las clases dirigentes de la sociedad civil. Esta creación de los dos partidos constituyó la respuesta a la *fragmentación del poder* a nivel nacional, regional y local, que caracterizó la historia independiente del país al desaparecer el poder unificado de la Corona española¹³. También fue la respuesta a la crisis de legitimidad que experimentaron los nuevos gobiernos republicanos que reemplazaron a las autoridades metropolitanas, al proporcionar a la población un vehículo de identificación con la sociedad nacional en proceso de conformación y un instrumento de relación entre las clases dirigentes regionales y la burocracia central: estos procesos de interrelación e identificación van a caracterizar la historia de la formación de la nación colombiana.

11 GONZALEZ, Fernán y ZAMBRANO, Fabio. *Orígenes históricos de la Violencia*, (inédito, proyecto de investigación), 1988.

12 "Colombia: conflicto social y violencia, 1980-1988. Temas para una investigación", Documentos ocasionales No. 48, CINEP, Bogotá, 1988, págs. 15-21.

13 PALACIOS, Marco. "La fragmentación regional de las clases dominantes en Colombia. Una perspectiva histórica", en Palacios, *Estado y clases sociales en Colombia*, Procultura, Bogotá, 1986.

Por ello, para comprender la vida política del país, es necesario tener en cuenta los tres polos antes señalados (localidad, región, nación), concebidas en una continua y cambiante interrelación, que se expresa a través de las vicisitudes de los partidos políticos. El proceso de articulación de estos tres polos por medio de los partidos tradicionales supone:

1. La existencia de grupos oligárquicos que compiten entre sí por el control político de su localidad o región: en estos conflictos los intereses socioeconómicos juegan un papel preponderante pero no exclusivo, pues se entremezclan con enfrentamientos entre familias o al interior de ellas, luchas por el prestigio o *status* social, choques entre generaciones, etc. (Valga la pena anotar que la palabra *oligárquico* se entiende aquí en el sentido más puramente técnico y etimológico de la palabra, despojado de toda connotación peyorativa).

2. La existencia de rivalidades intrarregionales e interregionales por diferentes motivos, frecuentemente socioeconómicos como la construcción de caminos o vías férreas que significaban el acceso de la región a otros mercados pero también de carácter político-administrativo como las rivalidades entre diferentes ciudades por ser la capital del estado o la provincia. Las ciudades en ascenso se enfrentan así a los privilegios de la antigua capital provincial o de la ciudad a la cual debían su fundación. Las nuevas poblaciones de las zonas de colonización se rebelan pronto contra la dependencia de la ciudad de donde proceden¹⁴.

3. La existencia de diferentes y contrapuestos intereses de estas regiones y localidades con el conjunto de la nación en proceso de formación y consolidación, cuyos intereses a largo plazo no coinciden siempre con los de todas y cada una de las regiones.

14 Sobre esta problemática, Germán Colmenares ha hecho importantes sugerencias en su artículo "La nación y la historia regional en los países andinos, 1870-1930", en *Revista Andina*, Año 3, No. 2, diciembre 1985. Cfr. También Safford, Frank. "Formación de los partidos políticos durante la primera mitad del siglo XIX, en Aspectos polémicos de la historia colombiana. . .

4. La existencia de varias propuestas o diferentes proyectos de unidad nacional, expresados casi siempre por grupos de intelectuales y burócratas, localizados generalmente (pero no siempre) en la capital de la nación. Estos proyectos deben proyectarse y hacerse presentes de alguna manera en las regiones. De ahí la importancia de analizar las relaciones que se establecen entre la burocracia de la capital, las burocracias regionales y las redes de parentesco e interrelación entre las diferentes elites regionales y locales.

III. Niveles de competencia política

Los cuatro puntos antes descritos hacen que el proceso de articulación que logran establecer los partidos sobre los diversos polos de poder se inserta así en una competencia de dos niveles, que se refuerzan mutuamente:

1. La competencia entre los *diversos ámbitos de poder local y regional* con una base económica y social que con frecuencia se remonta a los tiempos coloniales. Estos ámbitos de poder oligárquico influyen y buscan apoyo en el *poder político de carácter nacional* que está tratando de configurarse desde el centro de la nación. Para desplazar a los grupos rivales en la propia localidad y región, las oligarquías locales y regionales buscan la alianza de grupos afines de otras regiones y se adscriben a alguno de los grupos que expresan y lideran una corriente política de carácter nacional, que generalmente expresan un proyecto de unificación. Con esto, logran un doble objetivo: por un lado, se proyectan a nivel nacional tratando de imponer sus ideas e intereses más allá de sus fronteras provincianas; por otro, refuerzan sus propias posiciones en el nivel local y regional.

Este nivel de competencia supone que la región o subregión se define más como *ámbito de poder* de una familia o grupo social, que en términos de integración económica o de pertenencia administrativa, aunque obviamente a menudo las tres cosas están ligadas. El ámbito de poder del grupo oligárquico y su articulación con los ámbitos de otras oligarquías locales y regionales pueden a veces producir cierto grado de

integración económica e imponer cierta delimitación administrativa. Es obvio que este poder oligárquico posee un respaldo económico en la región pero no se reduce a él. Además, las actividades económicas de dichas oligarquías regionales conllevan el establecimiento de relaciones con grupos complementarios de otras regiones y naciones.

Esta competencia intrarregional supone también que el poder del grupo oligárquico predominante nunca está libre de contestación o desafío al interior de su ámbito local o regional, sino que está siendo frecuentemente puesto en cuestión por elites secundarias o subalternas en ascenso, que buscan derrocar a las dominantes o principales del control social, económico y político en su espacio regional.

2. La competencia entre diferentes proyectos de articulación o unificación nacional, cuyos propugnadores necesitan también apoyarse en las oligarquías regionales y locales con el fin de extender su influencia a nivel de toda la nación para lograr la hegemonía en ella. Generalmente, esos diferentes proyectos se expresan en programas políticos de carácter abstracto elaborados por grupos de intelectuales y burócratas, casi siempre de carácter urbano e incluso localizados en la capital nacional. Esos programas sirven de "paraguas ideológico" que cubre las diferencias locales y regionales, aunque hay que considerar también las *redes de relaciones interpersonales* entre la burocracia nacional y las oligarquías regionales y locales, si se quiere comprender a fondo este proceso de articulación entre centro y periferia. Los programas políticos van variando en las diferentes circunstancias del siglo XIX, expresando diversas concepciones sobre la sociedad, el Estado y la economía, aunque los partidos nunca se articulan homogéneamente en torno a concepciones comunes sobre esos temas. En este sentido, serán mucho más importantes las discrepancias que surgen en torno al papel que deberá desempeñar la Iglesia católica en la sociedad y el Estado, lo mismo que en torno al grado y manera de movilización social y política de las masas populares.

IV. Los programas de los partidos en relación con la Iglesia

Así, se redactan en 1848 y 1849 los primeros programas de los partidos conservador y liberal que se contradistinguen en torno a la frontera divisoria de la posición que asumen respecto al papel social y político de la Iglesia y a la presencia de los jesuitas en el campo educativo. Pero este hecho no es fruto de una esencia o naturaleza ahistórica que llevaría a la Iglesia a aliarse con el partido conservador por representar los mismos intereses socioeconómicos (por ejemplo, los intereses de los terratenientes tradicionales), sino el resultado concreto de un *proceso histórico*, complejo y contradictorio, que se evidencia en las luchas políticas específicas en torno a los gobiernos de Márquez, Herrán, Mosquera, José Hilario López, y Obando.

El alineamiento de la Iglesia con los sectores conservadores es fruto de una serie de hechos en los cuales la jerarquía eclesiástica de la época republicana va paulatinamente distanciándose de los grupos políticos donde se había originado (santanderismo civilista y radical) y va progresivamente alineándose con los sectores que rodean al gobierno del presidente José Ignacio de Márquez (inicialmente santanderismo moderado y luego grupo "ministerial" o protoconservador), al cual se han adherido los antiguos bolivarianos como los generales Herrán y Mosquera.

Por su parte, el grupo de Márquez ha ido alejándose de sus originales concepciones regalistas y hasta un tanto anticlericales al punto de llegar a convertirse en defensor de la autonomía de la Iglesia, recibiendo el apoyo tanto del grupo bolivariano como el del sector ultramontano y proclerical de José Ignacio Morales, que hasta entonces se había opuesto como al gobierno de Márquez lo mismo que al arzobispo Mosquera, al que consideraban demasiado liberal¹⁵.

Esta evolución culmina en la llamada "Guerra de los Supremos" y sus consecuencias se hacen expresas en la reforma

15 GONZALEZ, Fernán. "Iglesia y Estado en Colombia durante el siglo XIX (1820-1860). *Documentos Ocasionales* No. 30, CINEP, Bogotá, 1985.

constitucional de 1843 y la reforma educativa de 1842: en ambas jugaría un importante papel el futuro ideólogo conservador, Mariano Ospina Rodríguez. Los gobiernos protoconservadores de Márquez y de Herrán empiezan a adoptar medidas cada vez más favorables a la Iglesia católica, en parte como contraprestación del apoyo que la jerarquía le había prestado en la guerra de los Supremos y en parte porque necesitaban *una base social de apoyo* que le permitiera contrarrestar las tendencias supuestamente anarquizantes de la educación en boga, basada en Bentham y Tracy, y las corrientes más o menos federalizantes de la Constitución de 1832. La participación de algunos sectores de la Iglesia católica en la reforma educativa conservadora de 1842 y en la venida de los jesuitas en 1844 servirá para acentuar más la posición frente a la Iglesia como frontera divisoria entre los partidos en formación¹⁶.

Como contraparte, los liberales como Ezequiel Rojas y Manuel Murillo Toro critican esta alianza que se está forjando entre la jerarquía eclesiástica, liderada por el arzobispo Mosquera (cuya familia se alinea claramente al lado del gobierno) y el partido ministerial o protoconservador, que todavía es un grupo en proceso de formación, compuesto por facciones disímiles y a veces opuestas entre sí. De ahí que el primer programa del liberalismo, redactado por Ezequiel Rojas, critique el uso de la religión como sistema de gobierno y la presencia de los jesuitas en la educación¹⁷. Por su parte, el partido conservador se proclama, en el programa redactado por José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez, como defensor de la moral del cristianismo y de la tolerancia frente a la intolerancia liberal contra los jesuitas.

Las reformas políticas de la llamada “Revolución Liberal” de mediados de siglo se mueven dentro de este contexto: buscan contrarrestar el proceso de alineamiento de la Iglesia con los sectores conservadores atacando la estructura jerár-

16 HORGAN, Terrance. *El Arzobispo Mosquera: reformista y pragmático*, Ed. Kelly, Bogotá, 1977.

17 MOLINA, Gerardo. *Las ideas liberales*. . . , Cfr. También JARAMILLO URIBE, Jaime. *El pensamiento colombiano*. . .

quica vertical que los obispos estaban tratando de crear al interior de la Iglesia en contra de las tradiciones del Patronato que otorgaban injerencia al gobierno civil en los nombramientos de curas y dignidades eclesiásticas. Se busca entonces desvincular el nombramiento de curas párrocos de la jerarquía eclesiástica descentralizando el Patronato: la intervención estatal pasaba de las autoridades centrales y provinciales a las juntas locales de padres de familia, que debían escoger a sus respectivos pastores de una terna presentada por el obispo. Con curas nombrados así, se podrían tal vez establecer alianzas políticas entre el clero local (desvinculado del obispo) y las estructuras locales de poder, ahora bajo el control liberal. Así, las reformas eclesiásticas del gobierno liberal hacían probablemente parte de una estrategia general para contrarrestar el peso de los conservadores en la sociedad de entonces¹⁸. Pero esa estrategia chocaba con la tendencia de la Iglesia que intentaba lograr cierta independencia frente al poder civil y a romper con las ataduras del Patronato heredado del rey de España.

Esto hizo que las reformas liberales fueran contraproducentes al reforzar la estructura jerárquica que pretendían combatir: la persecución y destierro del arzobispo Mosquera por haberse enfrentado al gobierno por el nombramiento de curas, sólo logró compactar a los obispos, clero y partido conservador en contra del liberalismo. Lo mismo ocurrió con los dos destierros de los jesuitas, el exilio de varios obispos y del nuncio Ledójosqui, la desamortización de bienes de "manos muertas" y la "tuición" o control del gobierno sobre la Iglesia implantado por el general Mosquera.

Además, la instrumentalización que hizo el partido conservador de estas medidas anticlericales intentaba lograr movilización popular en contra del liberalismo: esto impidió toda posibilidad de negociación o conciliación entre sectores moderados del clero y del liberalismo, que hubieran podido suavizar los conflictos.

El predominio de los sectores intransigentes de ambos lados llevó a una serie de enfrentamientos en torno al jura-

18 HORGAN, o.c.

mento de lealtad que los clérigos debían prestar a las leyes y autoridades civiles de acuerdo con la Constitución de Rionegro y con las reformas educativas que el gobierno radical buscaba implantar en 1870¹⁹. Las diferentes posiciones de varios obispos en este punto produjeron una profunda escisión al interior de la Iglesia.

La polémica en torno a estas reformas educativas jugó un importante papel en la guerra civil de 1876-1877, que presentó un fuerte cariz de guerra religiosa: esto produjo un endurecimiento de las tensiones entre el liberalismo y la Iglesia, que se habían suavizado un tanto bajo el Olimpo Radical. El resultado de estas luchas se verá reflejado en la Regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, que va a quedar plasmada en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. El hecho de haber involucrado los problemas religiosos en las luchas políticas ha contribuido no poco al fanatismo e intolerancia que han caracterizado tradicionalmente a la cultura política de Colombia²⁰.

Sin embargo, las posiciones de liberales y conservadores frente a la Iglesia católica y la reacción de ésta frente a aquéllas distó mucho de ser totalmente homogénea e indiferenciada.

Habría de anotar, además, que la confrontación del liberalismo con la Iglesia católica posee raíces más profundas, que tienen que ver con la actitud general de la Iglesia frente al mundo moderno y a las ideas de la Ilustración, con la situación internacional de la Santa Sede enfrentada a los liberales y anarquistas en Europa, con los enfrentamientos del Papa como soberano temporal con el movimiento hacia la unidad italiana y con la herencia del Patronato que regía las relacio-

19 GONZALEZ, Fernán. "Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical, 1863-1878", en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No. 15, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987 (1988).

20 GONZALEZ, Fernán. "Iglesia católica y Estado colombiano", en *Nueva Historia de Colombia*, Tomo II, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 1989.

nes entre las Iglesias iberoamericanas y el Estado español y portugués.

Las Iglesias iberoamericanas, para nuestro caso la colombiana, estaban acostumbradas a la protección incondicional del Estado que les garantizaba una situación de monopolio religioso e intelectual, que ellas quieren seguir mateniendo bajo los nuevos regímenes republicanos. Pero, por otra parte, quieren empezar a reivindicar su autonomía frente a los nacientes estados (particularmente en el nombramiento de obispos y funcionarios eclesiásticos) y establecer una normal relación con la Santa Sede, con la cual apenas si tenían una distante relación durante la época colonial, pues las relaciones con Roma pasaban por Madrid y Lisboa.

Esta doble posición contrasta con la de los gobernantes republicanos, que querían seguir controlando a las Iglesias en el mejor estilo de los monarcas borbónicos pero sin garantizarles el monopolio al cual estaban acostumbradas, puesto que querían abrirse a las nuevas ideas en boga y facilitar la llegada de migrantes europeos mediante la tolerancia o libertad de cultos, que era lógicamente rechazada por la jerarquía católica. Además, el peso de la Iglesia en la sociedad era enorme frente a la precariedad del Estado en formación, sobre cuya legitimidad se estaba lejos de lograr consenso: las rentas públicas eran exiguas al lado de las riquezas de la Iglesia, cuya legitimidad estaba por encima de toda duda y cuya presencia a lo largo del territorio nacional estaba garantizada por un buen número de curas párrocos y religiosos²¹.

V. Las relaciones de los partidos con las masas populares

El contexto de los primeros años del alineamiento entre la Iglesia y el partido conservador es también significativo para entender la apelación del liberalismo a las masas urbanas marginales, a los grupos sociales en ascenso y a las poblacio-

21 GONZALEZ, F. Prólogo a la reedición del libro *La Iglesia y el Estado en Colombia*, de Juan Pablo Restrepo, Banco Popular, Bogotá, 1987.

nes de las regiones de vertiente que los procesos de colonización estaban articulando a la nación. Esta apelación buscaba contrapesar de alguna manera el ascendiente del clero católico sobre las masas campesinas tradicionales, especialmente en las zonas andinas, que se habían caracterizado en el pasado indígena por tener mayor densidad demográfica y una organización social más compleja²².

Así, el liberalismo busca asentarse en las zonas de *tierra caliente* que están recibiendo continuamente (sobre todo, a partir del siglo XVIII) migraciones de población mestiza, que llega de las tierras altas: tanto estas regiones de tierra cálida como las poblaciones mestizas suelen caracterizarse por un control menor por parte de la institución eclesiástica, cuya presencia es menor entre ellas que en las zonas del altiplano. Por otra parte, el liberalismo está tratando de crearse una base social urbana aprovechando los conflictos de los artesanos de Bogotá, de los problemas generados en torno a los ejidos de Cali, y otras situaciones similares²³.

En este sentido, la necesidad de cierta refrendación popular del poder ya existente de hecho (y de la construcción de nuevos poderes, que buscan reemplazar a los antiguos) obligó a los partidos a recurrir a las masas populares. Esto convirtió a los partidos, especialmente al liberal, en vehículos de expresión de los conflictos sociales que eran así canalizados de alguna manera, lo mismo que en mecanismos de movilidad y reconocimiento sociales y en mecanismos de integración de nuevas regiones al país por la vía de las redes políticas. Por esta razón, el liberalismo logra apoyo social en las clases medias urbanas en ascenso y en las elites secundarias de las regiones y localidades en su lucha por desplazar a las oligarquías principales del control del poder en esos ámbitos²⁴.

22 GONZALEZ, F. y ZAMBRANO, Fabio. *Orígenes históricos* . .

23 *Ibidem*.

24 "Colombia: conflicto social y violencia, 1980-1988, Temas para una investigación". *Documentos ocasionales*, No. 48, CINEP, Bogotá, 1988.

Pero la movilización política de las masas urbanas y de los grupos en ascenso se mostró socialmente peligrosa al desembocar en el apoyo de estos grupos al presidente Obando y luego en el respaldo al golpe de estado del general Melo, que fue rápidamente neutralizado por los sectores más tradicionales de ambos partidos, liderados por los generales Mosquera, Herrán, José Hilario López y Tomás Herrera²⁵. El resultado de la participación popular en el golpe de Melo fue producir una actitud de desconfianza de los jefes liberales frente a la movilización política de las masas: esto hace que el partido liberal se elitice cada vez más aunque nunca se cierre del todo al ascenso social de los nuevos sectores, pero siempre con el temor de que las masas y nuevos grupos escapen al control de sus jefes. Esta evolución del liberalismo aparece muy notoria en los gobiernos del llamado Olimpo Radical: según su historiador de cabecera, Eduardo Rodríguez Piñeres, los prohombres del Radicalismo estaban tan por encima de las pasiones políticas que se rehusaban a hacer propaganda entre las masas populares para buscar respaldo hacia sus programas²⁶.

El partido conservador nunca se mostró inclinado a una agitación popular masiva pues implicaba el riesgo de socavar las bases de "el edificio de la sociedad", así que el "miedo al pueblo" va a caracterizar en buena parte la vida política nacional. De hecho, la misma forma de estructuración interna de los partidos implica un carácter nada democrático: los partidos se fueron construyendo como federaciones nacionales de oligarquías regionales y locales (en el sentido técnico y etimológico de la palabra) para articular *desde arriba* las buro-

25 GUILLEN MARTINEZ, Fernando. *El poder político en Colombia*, Ed. Punta de Lanza, Bogotá, 1979. Cfr. También Colmenares Germán. *Partidos políticos y clases sociales*, Universidad de los Andes, Bogotá, 1968.

26 RODRIGUEZ PINERES, Eduardo. *El Olimpo Radical. Ensayos conocidos e inéditos sobre su época, 1864-1884*. Ed. Voluntad, Bogotá, 1950. Cfr. También González, Fernán. "Problemas políticos y regionales durante los gobiernos del Olimpo Radical. Antecedentes de la Regeneración". Ponencia en simposio sobre el centenario de la Regeneración, Universidad de Antioquia, Medellín, 1986, (inédito).

cracias del centro de la nación con el resto de la sociedad nacional, caracterizada por la fragmentación y la desintegración. Este estilo de construcción de los partidos excluye de entrada la participación política autónoma de las grandes masas del país, pudiéndose caracterizar la situación política de Colombia como una "democracia oligárquica", "una democracia sin pueblo"²⁷. Ni siquiera en la época de la irrupción de los populismos en América Latina, se produce en Colombia una apelación a lo popular como mecanismo de ampliación de la participación política. Gaitán puede considerarse en cierto sentido como una excepción a esta tendencia, pero hay que recordar que el movimiento gaitanista desaparece con el asesinato de su carismático líder. La presencia de la Alianza Nacional Popular como movimiento populista será igualmente efímera.

VI. Clientelismo y privatización del poder

A pesar de su carácter limitado en términos democráticos, los partidos tradicionales suplieron en muchos aspectos la presencia unificante del Estado al articular las burocracias nacionales con las regiones y localidades por medio de la creación de dos federaciones de grupos de notables que compiten entre sí y median entre la sociedad y el Estado. Además, los partidos establecen mecanismos de identificación colectiva de los individuos con la vida política nacional a través de una relación de lealtad con un jefe político que puede ser de carácter nacional, regional o local, que lo vincula de alguna manera con la nación. En muchos ámbitos, esta relación es de tipo clientelista pero en otros se da un tipo más moderno de adhesión, donde juega más la opción personal por una doctrina o concepción de la vida social y política.

Hay que entender el clientelismo en el contexto concreto de la sociedad desigual en cuyo interior se enmarca: en una sociedad donde el acceso a los servicios del Estado y de la se-

27 ZAMBRANO, Fabio. "Contradicciones del sistema político colombiano", en *Análisis. Conflicto social y violencia en Colombia*. Documentos ocasionales No. 50, CINEP, Bogotá, 1988.

guridad social formal es muy restringido, el clientelismo se presenta como un mecanismo primitivo e informal de seguridad social por medio del cual las masas populares y los sectores medios logran cierto acceso a los beneficios del Estado. Por su mismo carácter esencial, es un sistema restringido de otorgamiento de los servicios del Estado a la población²⁸.

El esquema clientelista encuadra así las relaciones entre las elites y sus respectivos seguidores adoptando formas concretas diferentes según la situación y la actividad predominantes de la respectiva elite regional: peones, aparceros y arrendatarios constituyen la cauda electoral del respectivo hacendado, sea liberal o conservador; dependientes siguen al comerciante, sea liberal o conservador; los funcionarios públicos siguen al jefe político al que deben su nombramiento, etc.²⁹.

Pero hay también adscripciones más voluntarias, especialmente entre los sectores medios urbanos, que manifiestan un comportamiento político más moderno. En el campo, los medianos y pequeños propietarios son reclutados de manera menos forzada para la participación electoral o la guerra civil. En ciertas zonas de colonización espontánea, donde son más débiles las formas de cohesión social interna y más precarios los mecanismos de control social, económico, político o religioso, la población es más fácilmente reclutable para toda suerte de aventuras, dada su necesidad de reconocimiento y ascenso social.

Esta adscripción, clientelista o voluntaria, proporciona a los adscritos a un jefe o grupo político un medio de identificarse con una realidad que trasciende los límites de las lealtades familiares y locales expresadas en relaciones de solidaridad, amistad, parentesco. Esta identificación produce un sentimiento de pertenencia a un grupo político al cual profesan lealtad, lo que los hace miembros de una comunidad imaginada más amplia que las comunidades locales a las que perte-

28 GONZALEZ, Fernán. "Clientelismo y administración pública", en *Enfoques colombianos*, No. 14, Bogotá, 1980.

29 GUILLEN FERNANDEZ, Fernando. *El poder político en Colombia*, Ed. Punta de Lanza, Bogotá, 1979.

necen. A medida que se va consolidando el Estado, el clientelismo asume formas diversas jugando el papel de articulador entre los individuos y el gobierno nacional: los individuos se relacionan con el gobierno a través de la mediación de las elites locales y regionales federadas en los partidos liberal y conservador, que les ofrecen cierto reconocimiento social y político, algún sentimiento de pertenencia a la Nación y un acceso limitado a los servicios del Estado, así sean de carácter precario.

Peró el hecho de que la adscripción partidista no se agote en la relación clientelista hace más compleja la estructura y el funcionamiento de los partidos tradicionales: a los sectores más modernos de los partidos, hay que ofrecerles apelaciones menos tradicionales para que intervengan en política.

Las guerras civiles y los enfrentamientos políticos concretos fueron solidificando y haciendo permanentes estas adscripciones políticas por medio de los llamados "odios heredados" de padres a hijos y las solidaridades producidas por la lucha común, que van fortaleciendo la conciencia o el sentido de pertenencia a la "Comunidad Imaginada" de su partido político o de la facción de éstos a la que sienta más cercano el individuo. Esa comunidad imaginaria va haciéndose así más real y concreta y va constituyéndose como una especie de puente entre el individuo o pequeño grupo social y la sociedad y el Estado. La pertenencia a una facción local o regional de la federación nacional de tales grupos (grupo político local o regional, adscrito a un partido nacional) es el vehículo para expresar y sentir la pertenencia a la Nación. La sociedad nacional concebida como conjunto de regiones se articula al Estado por medio de los partidos políticos concebidos como coaliciones de elites regionales y locales. Obviamente, se trata de una articulación de la sociedad *desde arriba* pero que logra penetrar toda la cultura social y política hasta abajo, por medio de las adscripciones clientelistas o voluntarias. Los partidos se transforman en una especie de dos subculturas políticas contrapuestas.

En resumen, esta integración suprarregional de elites en torno a maquinarias nacionales rivales y comunidades de sen-

timiento contrapuestas, con una base social clientelista o voluntaria, constituyó una fuerza equilibradora y neutralizante de las tendencias centrífugas de Colombia durante el siglo XIX³⁰. Esta integración y comunidad cultural imaginada se expresa en la adhesión a programas abstractos, mitos y símbolos comunes, personajes históricos y a un juego complejo de imágenes y contraimágenes que contribuyen a reforzar la comunidad de sentimiento ya existente.

Pero esta conformación del Estado-Nación por la mediación de los poderes privados de regiones y localidades federados en los partidos tradicionales dista mucho de producir un Estado moderno que pueda colocarse por encima de los intereses locales y regionales. Las bases sociales del Estado siguen perteneciendo al mundo de las relaciones de la sociedad tradicional.

La mediación bipartidista entre Estado y sociedad civil no modifica esencialmente la fragmentación del poder existente, aunque sí la compensa un tanto: es claro que el poder político continúa siendo básicamente privado. Esta privatización del poder se manifiesta en las relaciones del Estado con las diversas instancias privadas de poder expresadas en los partidos en sus diversos niveles: el poder político propio de los jefes locales y regionales es legitimado por una especie de delegación de poder por parte del Estado, que no hace sino confirmar el poder que ya tienen de hecho. Esta delegación se hace evidente en el reparto de cuotas burocráticas a nivel departamental y regional, aunque la elección popular de alcaldes modifica algo este esquema: ahora, los poderes locales pueden expresarse directamente y romper en algunos casos con la adhesión a los partidos tradicionales. Los alcaldes cívicos podrían ejemplificar esta tendencia.

30 PALACIOS, M. "La fragmentación. . . Safford, F. "Aspectos sociales de la política en la Nueva Granada, 1825-1850, en *Aspectos del siglo XIX en Colombia*, Ed. Hombre Nuevo, Bogotá, 1977. Cfr. También Safford, "Formación de los partidos políticos durante la primera mitad del siglo XIX", en *Aspectos polémicos de la historia colombiana. Memoria de un seminario*, Fondo Cultural Cafetero, 1983.

Pero, en términos generales, la autonomía del Estado frente a los partidos continúa siendo muy restringida al descansar buena parte del poder real en estos últimos, en sus diversos niveles local, regional y nacional, de modo que el Estado termina por coincidir con la hegemonía de uno de ellos o la cohabitación de ambos en el poder. Este juego de mediación entre Estado y partidos constituye a la vez la fuerza y la debilidad del sistema político colombiano: por una parte, se compensa y equilibra la fragmentación del poder permitiendo cierta presencia de los aparatos del Estado en las regiones al articular la burocracia central del Estado nacional con las regiones y localidades. Por otra parte, esta delegación de poder refuerza la fragmentación de éste, lo que dificulta a menudo las reformas modernizantes pensadas desde el centro. A veces, esta contradicción se expresa a través de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Estas reformas, pensadas a veces como un intento de control de las burocracias nacionales sobre las instancias regionales de poder e inspiradas frecuentemente en realidades culturales y sociales muy diferentes de las nuestras, producen normalmente el choque de dos lógicas: una "modernizante" y otra "tradicional". Estas lógicas contrapuestas tienden a neutralizarse mutuamente, produciéndose una ineficaz omnipresencia del Estado, que algunos confunden con una hipertrofia desmesurada del Estado que habría que intentar dismantelar en el mejor estilo de Reagan y Thatcher. El Estado central tiene suficiente poder para entorpecer las iniciativas que parten de las regiones y localidades pero carece de la fuerza necesaria para tener una presencia eficaz en la periferia nacional (que comienza en los barrios marginados de las grandes ciudades). Además, muchas de las reformas propuestas por el Estado central pasan por alto las idiosincrasias y las problemáticas específicas de las regiones. Toda esta compleja situación se expresa en un divorcio entre el discurso formal de políticos y tecnócratas, de corte moderno y demoliberal, y la práctica política concreta, basada en las formas de la sociedad tradicional y en la perpetuación de la desigualdad de oportunidades. Muchas de las prácticas clientelistas se alimentan de ese divorcio.

El resultado de todo este estilo político es la ambigüedad y precariedad de la presencia del Estado en la sociedad, que resultan de la fragmentación del poder existente y termina reforzando dicha fragmentación. Esta fragmentación del poder aumenta la crisis actual de legitimidad del Estado y se expresa en la pérdida del monopolio de la fuerza legítima. Algunos van más lejos en esta línea de pensamiento llegando hasta afirmar que el Estado colombiano nunca llegó a poseer plenamente ese monopolio, por tener sus bases en los poderes privados federados en los partidos tradicionales. Pero reconocen que la situación actual constituye un serio empeoramiento de la situación de precariedad de la presencia del Estado y de la fragmentación del poder.

VII. Los momentos del proceso de articulación nacional durante el siglo XIX

La fragmentación del poder y las consiguientes tensiones entre sus instancias locales, regionales y nacionales, se vieron reflejadas durante el siglo XIX en los enfrentamientos federalismo-centralismo y en las guerras civiles regionales y nacionales. Esta serie de conflictos refleja la transición de los principales momentos de la articulación entre burocracia nacional y elites regionales y locales y muestra los episodios principales del proceso paulatino de construcción de la nación colombiana. En estos momentos claves de la vida política van definiéndose la sociabilidad política y la adscripción de personas, familias, grupos sociales y regionales a uno u otro de los partidos, pero esta adscripción conserva cierta fluidez a lo largo del siglo XIX.

El primer momento clave de la construcción de las redes de relaciones políticas, que van a desembocar en la formación de los partidos y de la nación, es la creación de la *coalición santanderista*: ésta se inicia con el primer gobierno del general Francisco de Paula Santander cuando desempeñaba el poder como vicepresidente (en ausencia del Libertador Bolívar, que continuaba luchando en el sur), pero se hace más clara cuando se producen los enfrentamientos entre *santanderistas* y *bolivarianos*. La conducta política adoptada con respecto a la dictadura de Bolívar y en la lucha contra la de Urdaneta va a

convertirse en la piedra de toque para distinguir a “los verdaderos republicanos” (como se autodenominan los amigos de Santander) de los “serviles” (como llaman los santanderistas a los que tuvieron algo que ver con las dictaduras de Bolívar y Urdaneta)³¹.

La exclusión de los antiguos seguidores de Bolívar de los puestos públicos y del escalafón de los mandos militares (bajo Obando y Santander) servirá para cohesionar al grupo opuesto a los santanderistas y producirá algunos resquemores de viejos militares, como se trasluce en la conspiración del general Sardá, ferozmente reprimida por el presidente Santander. La cohesión de los excluidos se manifestará en un grupo de oposición contra el segundo gobierno de Santander: la intolerancia de éste y la de sus amigos más cercanos contribuirá no poco a reforzar la unidad del grupo opositor.

Pero la coalición santanderista distaba mucho de ser totalmente homogénea: estaba compuesta por la burocracia civil, originada casi toda en los sectores urbanos de las regiones centroorientales del país, algunos caudillos militares de las provincias con bastante arraigo localista (casi ninguno de ellos había acompañado a Bolívar en sus campañas fuera de las fronteras del país) y algunos sectores de las elites tradicionales de las regiones (normalmente los grupos menos importantes de ellas, que buscaban ascender social y políticamente). En varios casos, los caudillos regionales tendían a coincidir con estas oligarquías segundonas: el caso más notorio es el del general Obando.

Esta heterogeneidad interna del grupo va a conducir a su ulterior división: algunos de sus componentes civiles como José Ignacio de Márquez eran bastante más moderados y tolerantes frente a los antiguos bolivarianos y urdanetistas; en cambio, otros como Vicente Azuero eran más radicales llegando a ciertos ribetes de anticlericalismo. Otros, como el propio general Santander, defendían la necesidad de caudi-

31 BUSHNELL, David. *El régimen de Santander en Colombia*, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1966. Cfr. También el artículo antes citado de Safford.

llos militares en el alto gobierno para poder garantizar la tranquilidad y el orden públicos. Esto lo llevará a proclamar y apoyar la candidatura del general Obando, lo que producirá la total ruptura de la coalición santanderista³².

El segundo momento de la constitución de redes políticas es el de la coalición de los llamados *ministeriales* (o proto-conservadores), resultado lógico de la crisis de la anterior red de relaciones: parte de la burocracia civil, la más tolerante con los antiguos bolivarianos y urdanetistas, logra triunfar en la elección presidencial con el nombre de José Ignacio de Márquez. El vicepresidente Márquez derrota las candidaturas de Obando (el más intolerante frente a los bolivarianos, razón por la cual es apoyado por el presidente Santander) y Azuero (abogado civilista y burócrata profesional, catedrático de Bentham y Tracy) considerado demasiado radical por el propio Santander.

El gobierno de Márquez es objeto de fuertes controversias por parte de un grupo de opositores civiles, liderado por Santander y Azuero: los defensores del gobierno o "ministerio" empiezan a ser llamados "ministeriales". Los caudillos militares del santanderismo en las provincias van rebelándose sucesivamente contra el gobierno de Márquez hasta que la guerra civil se hace general: es la guerra llamada de los Supremos, que logra amenazar la estabilidad del gobierno. Pero la falta de coordinación y de un mando único de los rebeldes por una parte y el fuerte apoyo de antiguos militares bolivarianos como los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, por otra, traen como resultado el triunfo final del gobierno³³.

En torno al gobierno triunfante, se organiza la coalición ministerial, que expresa su concepción del gobierno y de la sociedad en la reforma constitucional de 1843, considerada demasiado represiva y centralista por sus opositores, y en la

32 GILMORE, Robert. *Federalism in Colombia, 1810-1858*, Tesis doctoral inédita, Universidad de California, Berkeley, 1958.

33 *Ibidem*.

reforma educativa de 1842, en la cual era evidente la tendencia al regreso a autores católicos ortodoxos en contra de Bentham y Tracy, a cuyas ideas se achacaba la revolución de los Supremos. Era igualmente evidente la presencia de clérigos en la dirección de los establecimientos de enseñanza pública.

Tanto en la reforma constitucional como en la educativa juega un importante papel Mariano Ospina Rodríguez, quien redactará en 1849 el programa político del partido conservador, en asocio con José Eusebio Caro³⁴. En este mismo contexto, la venida de los jesuitas en 1844 y su presencia en el campo educativo van a convertirse en otra piedra de toque o frontera divisoria entre liberales y conservadores³⁵. Por eso, el programa político del liberalismo, escrito por Ezequiel Rojas en 1848, insistirá en la oposición a la presencia de los jesuitas en la educación y a la influencia política de la Iglesia católica como una de las diferencias más importantes que tenían los liberales frente a los conservadores. Por otra parte, la coalición ministerial se caracterizó por una relación muy estrecha entre gobierno e Iglesia católica.

El tercer momento de los agrupamientos políticos del siglo XIX fue la llamada *Revolución Liberal* de mediados de siglo, que inicia ya una cierta delimitación ideológica entre los partidos con el surgimiento de controversias intelectuales que cristalizan en la redacción de programas o plataformas políticas, antes mencionadas. Además, por primera vez en nuestra historia se produce una intensa movilización popular que aprovecha las tensiones sociales existentes en beneficio del partido liberal.

El gobierno liberal del general José Hilario López emprende una serie de reformas sociales y económicas (liberación de los esclavos, abolición de los resguardos indígenas, rendición de los censos eclesiásticos, fin del monopolio del

34 HELGUERA, León. *The first Mosquera Administration in New Granada, 1845-1849*, Tesis doctoral inédita, Universidad de Carolina del Norte, 1958.

35 SAMPER, José María. *Historia de un alma*, Ed. Bedout, Medellín, sin fecha, pp. 180-183.

tabaco), que buscaban una mayor liberalización de la vida económica y una mayor integración al mercado internacional. De suyo, el librecambismo había sido iniciado en el período conservador, bajo la presidencia del protoconservador Tomás Cipriano de Mosquera, pero con la colaboración del liberal Florentino González y del conservador Mariano Ospina Rodríguez. También se busca disminuir el peso social y político de la Iglesia católica procurando cierta secularización y modernización de la sociedad: se expulsa entonces a los jesuitas y al arzobispo Mosquera, se introduce la elección popular de curas párrocos, se busca la separación entre Iglesia y Estado³⁶.

En la revolución liberal de entonces juegan un papel destacado *las sociedades democráticas*, creadas para canalizar la movilización popular de los artesanos urbanos de Bogotá³⁷ y de otras ciudades como Cali³⁸, lo mismo que de otros grupos potencialmente opuestos al *statu quo*. Una vez en el poder, los liberales impulsan desde el gobierno la creación de más sociedades democráticas con el fin de expandir su influencia en las masas y de contrarrestar el peso de la Iglesia católica en favor del conservatismo, que era visible al interior de las masas rurales de las poblaciones de *tierra fría*.

Pero los liberales no eran tampoco un grupo homogéneo en su interior: la división entre *gólgotas*, partidarios del librecambismo y de un Estado "leseferista", y *draconianos*, partidarios de un Estado más intervencionista y proteccionista, en el trasfondo de la movilización política de los artesanos urbanos, prepara el camino al golpe de estado del general José María Melo, veterano de las guerras de la independencia (1854). El sector gólgota era también partidario de la abolición del

36 Obras citadas de Horgan, Gilmore y Helguera.

37 GRUSIN, Jay Robert. *The Revolution of 1848 in Colombia*, Tesis doctoral inédita, Universidad de Arizona, 1978. Cfr. También Colmenares Germán, *Partidos políticos y clases sociales*, Universidad de los Andes, Bogotá, 1968.

38 ESCORCIA, José, *Sociedad y Economía en el Valle del Cauca. Desarrollo político, social y económico*, Banco Popular, Bogotá, 1983.

ejército profesional, que debía ser reemplazado por las milicias ciudadanas³⁹.

El golpe de Melo obliga a las elites de los dos partidos a unir sus fuerzas en contra de la revolución populista, que es rápidamente vencida. La derrota de Melo conduce a los gobiernos conservadores de Manuel María Mallarino y Mariano Ospina Rodríguez, que triunfó en la única elección presidencial por voto popular directo (de la población masculina) del siglo XIX (1858). Ospina se enfrentaba a la candidatura liberal de Manuel Murillo Toro y la "progresista" o "nacional" del general Tomás Cipriano de Mosquera, que intentaba crear un tercer partido con elementos progresistas de ambos partidos (que terminaron casi todos adscribiéndose al partido liberal, pero con mayor cercanía a los sectores draconianos, por la concepción cesarista que tenía Mosquera del estado).

El resentimiento personal de Mosquera, que consideraba que el partido conservador y la Iglesia lo habían relegado a un lugar secundario para favorecer a Mariano Ospina Rodríguez, junto con las políticas centralizantes de éste en contra de la constitución federal vigente, produjeron la guerra civil de 1861. La coalición de varios estados federales liderados por Mosquera (Cauca, Bolívar), apoyada por los liberales radicales encabezados por Manuel Murillo Toro (en Santander, Boyacá y Magdalena) logró imponerse al gobierno nacional de Ospina. Estas coaliciones quedaron consagradas constitucionalmente en 1863 en la Convención de Rionegro, que produjo una carta excesivamente federal: en parte, esto se debía a las ideas utópicas de los liberales, pero también a la necesidad sentida de restarle poder al ejecutivo en manos ahora del general Mosquera, cuyas tendencias autocráticas eran obvias⁴⁰.

El cuarto momento de las coaliciones o redes de relaciones políticas se inicia precisamente con la Convención de Rio-

39 COLMENARES, Germán, o.c. y ESCORCIA, José, o.c. Cfr. También Ortiz, Venancio, *Historia de la revolución del 17 de abril de 1854*, Banco Popular, Bogotá.

40 Obras citadas de Venancio Ortiz y Germán Colmenares. Cfr. También Ortiz Vidales, Darío, *José María Melo. La razón de un rebelde*, Biblioteca de autores tolimenses, Ibagué, 1980.

negro cuando los liberales radicales se oponen a las tendencias dictatoriales del general Mosquera, en nombre del civilismo. Esta oposición se manifestó, como antes se ha dicho, en la marcada tendencia al debilitamiento del ejecutivo nacional, que quedaba desprovisto de poder para intervenir en los conflictos internos de los estados federales, lo que equivalía a estar incapacitado para mantener el orden público en la nación⁴¹.

Sin embargo, cuando desaparece la amenaza de la dictadura de Mosquera en 1867, el grupo de liberales radicales en el poder trata de ir fortaleciendo el gobierno nacional para convertirlo en un instrumento más capaz de intervenir en los asuntos nacionales pero sin modificar el texto de la Constitución. Para ello, se forma una coalición o red de relaciones políticas que maneja al Congreso Nacional: el líder de este grupo, denominado "el Olimpo Radical" por sus adversarios, fue Manuel Murillo Toro. Este grupo radical intentó suplir la debilidad del gobierno impuesta por la Constitución por medio de una maquinaria política que coaligaba a sus seguidores y aliados en las regiones, lo que les permitía el control del Congreso y de la Corte Suprema federal⁴².

Pero la concentración del origen de la mayoría de sus líderes y gobernantes, casi todos oriundos de las regiones del centrooriente del país, producía ciertos resquemores en las zonas periféricas en relación con el gobierno radical. Regiones como el Gran Cauca (que abarcaba casi la mitad del territorio poblado de la nación) y la costa atlántica se quejaban de que las obras públicas planeadas e impulsadas por los gobiernos radicales sólo favorecían a las regiones de donde eran oriundos sus principales líderes: la región de Vélez en Santander, el centro de Boyacá y el comercio de Bogotá eran los principales interesados en el ferrocarril del Carare, al cual los gobiernos de Santiago Pérez y Aquileo Parra querían destinar buena parte de los ingresos de la Nación. El enfrentamiento entre

41 PARRA, Aquileo. *Memorias*, Imprenta La Luz, Bogotá, 1912. Camacho R. Salvador, *Memorias*, Ed. Bedout, Medellín, sin fecha.

42 RODRIGUEZ PIÑERES, Eduardo, o.c.

parristas y nuñistas en la década de 1870 casi equivalía a defensores y opositores de dicho ferrocarril.

Por otra parte, el carácter cerrado del grupo y sus prácticas no muy democráticas en la selección de candidatos despertaban las críticas de los sectores más intelectuales del propio partido liberal, que encontraban mucho respaldo entre la juventud liberal. El desencanto de estos sectores se expresaba en la caracterización del grupo liberal como la Oligarquía⁴³. Estos sectores, junto con los grupos liberales de los estados de Bolívar, Panamá y el Cauca, van a reunirse en la primera coalición nuñista en contra del grupo radical en el poder: el historiador norteamericano William Park caracteriza estos enfrentamientos como el desafío “costeño” contra la dominación política de los “cachacos”.

Por otra parte, el grupo radical estaba tratando de reformar la educación pública en una línea más laicizante y centralizante⁴⁴, lo que significó una serie de conflictos con la Iglesia católica, especialmente en el estado del Cauca donde se enfrentaban los sectores más intransigentes de la Iglesia (los obispos de Popayán y Pasto, los monseñores Bermúdez y Restrepo, respectivamente) con los más duros del liberalismo en materias de relación con la Iglesia (Mosquera y César Conto)⁴⁵. Estos conflictos pusieron fin a las buenas relaciones que los liberales radicales del centrooriente habían procurado

43 DELPAR, Helen. *Red against Blue: The Liberal Party in Colombian Politics*, University of Alabama Press, 1981. Park, William, *Rafael Núñez and the Politics of Colombian Regionalism, 1863-1886*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1985.

44 LOY, Jane. *Modernization and educational reform in Colombia, 1863-1883*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Wisconsin, 1969. Cfr. También Loy, Jane, “Los Ignorantistas y las escuelas: oposición a la reforma educativa en el federalismo”, en *Revista Colombiana de Educación*, No. 9, CIUP, Bogotá, 1982 y “La educación primaria durante el federalismo. La reforma escolar de 1870”, en *Revista Colombiana*. . . No. 3, CIUP, Bogotá, 1979.

45 GONZALEZ, F. “Iglesia y Estado desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical, 1863-1878”, en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No. 15, Universidad Nacional, Bogotá, 1987.

46 Fernán E. González G.

mantener con los conservadores que controlaban los estados de Antioquia y Tolima⁴⁶, cuya neutralidad les permitía seguir controlando el gobierno nacional a pesar de las amenazas de los sectores mosqueristas y draconianos, que controlaban el estado del Cauca y conservaban cierto peso en otras regiones del país. (Los conservadores de Bogotá habían apoyado algunas de las maniobras políticas de los mosqueristas en contra del Olimpo Radical). Probablemente, se presentaban algunos conflictos fronterizos en las avanzadas de la colonización antioqueña sobre la zona norte del Cauca y algunas zonas del Tolima: las regiones circundantes de Manizales apoyaban las revueltas de los conservadores del Cauca, que se refugiaban en el estado de Antioquia, a pesar de la oposición del gobierno estadual con sede en Medellín. Estos conflictos regionales, junto con los enfrentamientos religiosos y políticos de carácter general desembocaron en la guerra civil de 1876-1877, que le abrió el camino de la presidencia al general Julián Trujillo, caudillo caucano, que preparó la llegada de Rafael Núñez al poder⁴⁷.

Núñez había sido derrotado fraudulentamente por la maquinaria política del radicalismo, que incluso intervino militarmente en varias regiones favorables al candidato cartagenero por medio de la guardia colombiana e hizo fraudes electorales en otras. Se impuso así a Aquileo Parra como presidente con el fin de mantener la hegemonía del Olimpo Radical y el predominio político de las regiones del centro-oriente colombiano (los estados de Santander, Boyacá y Cundinamarca), amenazados por la candidatura de Núñez, que era apoyada por los estados de Bolívar, Panamá y Cauca y algunas regiones de Cundinamarca y Santander. (El estado del Magdalena no hacía parte del bloque costeño, por las rivalidades de Santa Marta con Cartagena, pero las regiones de Riohacha y Ciénaga eran más favorables a Núñez, por rivalidades intrarregionales con Santa Marta). Los radicales nunca habían dominado hegemoníicamente a todo el país, pues los mosqueristas dominaban el Cauca y los conservadores Antio-

46 *Ibíd.*

47 GONZALEZ, F. "Problemas políticos y regionales. . .". Cfr. También, Park W., o.c.

quia y Tolima. A nivel del conjunto del país, el conservatismo continuaba reorganizándose como fuerza nacional, bajo el liderazgo de Carlos Holguín, que trató varias veces de sacar ventaja de la división interna del liberalismo: incluso, llegó a coaligarse con los mosqueristas para intentar derrotar a los radicales⁴⁸.

Frente a estas amenazas, el radicalismo tenía otra debilidad interna, debida a su reluctancia a acudir a la movilización de las masas populares en búsqueda de apoyo político: por esta falta de legitimación popular, los radicales se vieron obligados a basar su poder en maquinarias electorales que buscaban la exclusión del adversario de la posibilidad de acceder al poder por medios pacíficos, tanto en el conjunto de la nación como al interior de los estados-regiones. Este mantenimiento del *statu quo* político a nivel nacional y regional convertía a la guerra civil y la revuelta regional en el único medio de modificar el equilibrio político existente⁴⁹. A largo plazo, esto significó su derrota frente a Rafael Núñez, apoyados por el conservatismo nacional liderado por Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro.

Esta coalición de conservadores y liberales independientes en la llamada *Regeneración* constituyó el quinto momento de configuración de las redes de relaciones políticas durante el siglo XIX, que iba a marcar profundamente la historia ulterior del país, al quedar plasmadas en la centralizante constitución de 1886 y en el concordato de 1887, que significaría una estrecha relación entre Estado e Iglesia católica, bajo cuyo control quedaba el aparato educativo de la nación.⁵⁰ Esta coalición fue el resultado de la crisis interna del Olimpo Radical que hemos descrito anteriormente, de las contradic-

48 HOLGUIN y CARO, Alvaro. *Carlos Holguín. Una vida al servicio de la República*, Ed. Itagraf, Bogotá, 1981.

49 RODRIGUEZ PIÑERES, Eduardo, o.c.

50. OTERO MUÑOZ, Gustavo. *Un hombre y una época. La vida azarosa de Rafael Núñez*, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1951. Cfr. También González, F. "Iglesia católica y Estado colombiano, 1886-1930", en *Nueva Historia de Colombia*, Tomo II, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 1989.

ciones regionales ocultas en la política nacional y de la hábil política del conservatismo reorganizado y cohesionado por Carlos Holguín.

El bloqueo político de los radicales contra Núñez desembocó en la guerra civil de 1885, que forzó a este pragmático político a buscar la alianza política y militar de los conservadores. El triunfo de los liberales nuñistas y los conservadores coaligados significó el fin del extremo federalismo de la Carta de Rionegro, que condensaba las ideas principales del credo del Olimpo Radical. Pero las ideas de reforma constitucional que Núñez impulsaba se fueron convirtiendo en un proyecto totalmente distinto de constitución, debido a la influencia del doctrinario conservador Miguel Antonio Caro. El proyecto de constitución centro-federal de José María Samper, que aparentemente contaba con las simpatías de Núñez, fue reemplazado por la fuertemente centralista constitución de 1886, escrita por Caro en sus puntos más importantes. Otro proyecto, moderadamente federalista, escrito por el conservador caucano Sergio Arboleda, no fue tomado en consideración⁵¹.

La constitución de 1886 buscaba reconstruir la nación en forma unitaria limitando severamente los poderes regionales reunidos en los estados federales (que pasan ahora a ser departamentos, con gobernadores nombrados por el presidente) y apelando al sentimiento religioso y a la influencia de la Iglesia católica como elementos de cohesión social de la nación. Por eso, se firmó el concordato de 1887 que dejaba en manos de la Iglesia el control de la educación y de la vida familiar, lo que marcó la vida institucional del país con el sello de la lucha contra la modernidad: esto tendrá consecuencias notables para las relaciones entre la Iglesia, el Estado y la sociedad colombiana durante el siglo XX⁵². La centralización de la constitución de 1886 fue una respuesta a la tendencia a la excesiva fragmentación del país evidenciada en los

51 OTERO MUÑOZ, G., o.c. Cfr. También Liévano Aguirre, Indalecio, *Rafael Núñez*, varias ediciones, la primera de ellas en 1944.

52 GONZALEZ, F. "Iglesia católica y . . .", Ed. Planeta Colombiana, 1989.

Estados Soberanos consagrados en la Carta de Rionegro. Sin embargo, la organización de estas entidades territoriales no coincide necesariamente con las regiones naturales o geográficas: de suyo, los estados federales abarcan ya un conjunto de regiones muy heterogéneas entre sí constituyendo una reagrupación de antiguas provincias, más cercanas a las regiones naturales e históricas. De suyo, la centralización de la constitución conservatizante de 1843 estaba compensada con la tendencia a la multiplicación de provincias autónomas pero la carencia de recursos fiscales y de una burocracia preparada en esos niveles obligó a la creación de entidades territoriales mayores o macrorregiones, que fueron los estados federales. El problema era que esas entidades mayores estaban en capacidad de enfrentarse exitosamente al gobierno general.

Por esto, la centralización de 1886 se reflejó en el manejo del gasto público y en la creación de un ejército nacional, acompañados del desmantelamiento de los fiscos regionales (de los estados, que ahora pasan a denominarse departamentos) y la desaparición de las milicias o ejércitos de las regiones-estados federales. También se busca fortalecer la capacidad de intervención estatal en la economía nacional e impulsar desde la nación la construcción de obras públicas que vinculen las regiones entre sí.

Sin embargo, a nivel real, la fragmentación del poder siguió persistiendo en gran parte bajo formalidades centralizantes, pero se modificó el tipo de mediación política entre el centro y la periferia política: el poder político propio de dirigentes locales y regionales debió adaptarse a la nueva situación del gasto público sacando ventajas electorales de su acceso privilegiado a la burocracia nacional. Esto los convirtió en necesarios intermediarios entre las diferentes instancias del poder, moderando así el excesivo presidencialismo y centralismo de la carta constitucional. Por eso, así suene paradójico, la centralización terminó por fortalecer a los poderes regionales y locales, en vez de debilitarlos⁵³.

53 GONZALEZ, F. "Clientelismo y administración pública", en *Enfoques colombianos*, No. 14, Bogotá, 1980.

Sucesivas reformas estatales fueron acentuando la excesiva centralización, así fuera formal en muchos casos: Rafael Reyes, después del último intento liberal de regreso al federalismo en la guerra de los mil días, inició la disolución de los grandes bloques macrorregionales que podían representar cierto peligro de enfrentamiento con el poder de la nación creando unidades territoriales más pequeñas: del antiguo estado del Cauca salen el Valle, Nariño, Chocó, Putumayo y parte del Viejo Caldas (formado con parte de Antioquia y parte del Cauca). Santander es dividido entre Norte y Sur, el sur del Tolima Grande se convierte en el departamento del Huila, etc. Reyes busca fortalecer la capacidad económica del Estado: bajo su gobierno empieza a desarrollarse la industria nacional, particularmente la textilera en Antioquia⁵⁴. El gobierno apoya la consolidación del enclave extranjero en la zona bananera y otorga las primeras concesiones de explotación petrolera.

Pedro Nel Ospina, durante la llamada "República Conservadora", proporciona un impulso vigoroso a la integración interregional del país, al invertir la indemnización norteamericana por el despojo de Panamá y los préstamos extranjeros en la construcción de numerosas obras públicas. Durante estos años, se presentan los primeros pasos hacia la llamada modernización del país: esto se refleja, entre otras cosas, en el aceleramiento de la urbanización de la población por el cada vez mayor éxodo del campo a la ciudad.

En el período de la supuesta república conservadora (cuando se presentan varios gobiernos compartidos con el liberalismo) empiezan a aparecer serios conflictos sociales en la zona petrolera (Barrancabermeja), costera (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta) y bananera (en el departamento del Magdalena de entonces): la respuesta de los gobiernos conservadores es la represión. Lo mismo ocurrirá con algunos tumultos urbanos en Bogotá.

54 GONZALEZ, F. "La Asamblea Constituyente: I, ¿Hacia la consolidación del Estado Nacional"?, *Controversia*, Nos. 59-60, CINEP, Bogotá, 1977.

La crisis interna del partido conservador se sumó a esos conflictos para producir el cambio de régimen: la profunda división del conservatismo no pudo ser contrarrestada por el arbitraje del arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera Restrepo, como había ocurrido en el pasado⁵⁵. El consiguiente triunfo del partido liberal con Enrique Olaya Herrera (1930) iba a llevar al intento de modernización del Estado y de la sociedad colombiana bajo la llamada "Revolución en marcha" del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938).

VIII. La lucha en torno a una ambigua modernidad: la política colombiana entre 1930 y 1957⁵⁶.

El ascenso de Olaya Herrera al poder (1930-1934) se efectuó sin mayores traumatismos: era difícil esperar una alternación pacífica de los dos partidos, dado su carácter de "comunidades imaginadas" mutuamente excluyentes a la manera de subculturas separadas, junto con el hecho de que el Estado colombiano se confundía (y sigue confundiendo) con las ramificaciones del partido en el poder. Al principio del gobierno de Olaya se presentaron algunos conflictos armados en Santander y Boyacá, pero no se generalizó la violencia a todo el país. El relevo de las elites dirigentes se produjo de manera limitada y gradual, lo que permitió suavizar los conflictos: la economía sigue siendo manejada por empresarios antioqueños conservadores mientras que los veteranos liberales de la guerra de los mil días son desplazados por elementos más dinámicos de la tradicional elite liberal y

55 GONZALEZ, F. "Iglesia católica. . .", Ed. Planeta Colombiana, 1989. Cfr. También Mons. Restrepo Posada, José, *La Iglesia en dos momentos difíciles de la historia patria*, Ed. Kelly, Bogotá, 1971 y Orduz, Julio César, *Monseñor Ismael Perdomo y su tiempo*, Ed. Canal Ramírez, Bogotá, 1984.

56 Este capítulo se inspira mucho en las obras de Daniel Pécaut, *Orden y Violencia: Colombia 1930-1954*, Ed. Siglo XXI y CEREC, Bogotá, 1987 y *Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*, Ed. Siglo XXI, Bogotá, 1988. Este resumen recoge muchos aspectos de estos libros y del intercambio frecuente de ideas con su autor.

52 Fernán E. González G.

por elementos jóvenes de la intelectualidad liberal, influidos por algunas ideas cercanas al socialismo⁵⁷.

Este desplazamiento generacional va a hacerse patente en la orientación de la llamada República Liberal (1930-1946) hacia la búsqueda de la modernidad, inspirada en los modelos de la democracia inglesa y de las reformas de Roosevelt en los Estados Unidos. La nueva elite liberal va a verse representada en Alfonso López Pumarejo (sobre todo, durante su primer gobierno, entre 1934 y 1938), salido de los círculos financieros y exportadores de café, ligado al mundo del comercio y de la industria. López plantea la necesidad de modernización del Estado y de la sociedad en Colombia por medio de un intervencionismo social y una ampliación de la participación política, sin abandonar del todo el liberalismo económico. El intervencionismo social impulsado por López favorece la acción sindical y legitima los conflictos obreros como propios de una sociedad en desarrollo: el Estado se presenta ahora como árbitro de los conflictos sociales por encima de los intereses privados y no como instrumento de la clase dirigente. La apelación al "pueblo" por parte de la elite lopista buscaba crear un aparato estatal más independiente frente a las oligarquías tradicionales de ambos partidos, reforzadas por la alianza de las burguesías industrial y cafetera.

El apoyo del gobierno de López al sindicalismo hizo que los obreros y empleados sindicalizados se sintieran por primera vez representados por el Estado, lo que hizo que la central sindical CTC y el partido comunista cerraran filas en torno al gobierno liberal (incluso cuando éste deja de apoyar la movilización popular y sindical). Es claro, como muestra Pecaut⁵⁸, que López buscaba apoyarse en "el pueblo" para fortalecer al Estado como actor autónomo frente a los intereses parciales de las fracciones económicas y políticas: la clase obrera es llamada a servir de soporte a una nueva institución de lo social por la referencia a la unidad nacional simbolizada en el Estado y edificada sobre la base de los vínculos pueblo-estado.

57 PECAUT, D. *Orden y Violencia: Colombia 1930-1954*, pp. 128-129.

58 PECAUT, D., o.c., p. 242.

Por el otro lado, se afirma la ciudadanía social y política del pueblo: todos tienen derecho a estar integrados en la Nación, presidida por el Estado. El mito del lopismo va a generarse en este supuesto encuentro de la burguesía nacional con las clases populares bajo la égida del Estado.

Por todo esto, el proyecto de López representaba una ruptura con el estilo tradicional de la vida política colombiana y con la concepción imperante de estado: a comienzos de los años 1930, el Estado central continuaba siendo precario y falto de recursos económicos, no existía un mercado nacional unificado sino una economía fragmentada en islotes, ni la supremacía clara de una región o polo urbano sobre el conjunto de la vida económica de la nación. Las relaciones salariales estaban lejos de ser generales en la economía. El tardío nacimiento de una economía exportadora y la consiguientemente tardía vinculación al mercado internacional no modificaron las relaciones sociales predominantes en el agro colombiano: el campesino minifundista seguía siendo expulsado sistemáticamente hacia viejas y viejas zonas de colonización en las vertientes montañosas y los valles interandinos lo mismo que a las regiones de la Orinoquía y la Amazonia. También se produce éxodo rural hacia algunas ciudades que empiezan a aumentar de población de manera vertiginosa (Bogotá y ciudades vinculadas de alguna manera al cultivo o comercio del café), lo que significa una modificación del equilibrio regional.

En ese mundo tradicional, el orden político y social resultante se caracteriza porque los mecanismos de legitimación pública se subordinan a los intereses privados: la burguesía comercial y financiera debe seguir transigiendo con las innumerables "oligarquías locales", que se habían asegurado el monopolio de la tierra cercana de los centros de consumo y las vías de comunicación. La dominación social basada en la propiedad terrateniente de las regiones más o menos integradas a la economía y organización política de la nación proporciona los medios de una dominación política descentralizada: este poder fragmentado suele estar sobrerrepresentado en el órgano legislativo, gracias a su manejo del potencial electoral rural, esencial para la legitimación del Estado. En muchos sentidos, esto significa que continúa vigente el modelo político y el federalismo del siglo XIX, basado en la yuxtapo-

sición de elites heterogéneas que compiten entre sí y se federan nacionalmente bajo el rótulo de los partidos liberal y conservador. (En parte, este modelo sigue operando hasta hoy con los tradicionales barones electorales de ambos partidos). Pero los conflictos sociales de los años 1920 empezaron a poner en descubierto los límites de esa estructura política: esta tendencia se continúa a través del transcurso del resto del siglo XX.

Además, la dispersión, debilidad y fragmentación del poder de las elites económicas y la precariedad de los aparatos estatales dejan abierto un amplio espacio a los intermediarios políticos, que así disponen de un considerable margen de maniobra, ya que sólo ellos pueden garantizar el control social y político que la organización tradicional de las haciendas apenas puede asegurar de manera muy parcial⁵⁹. Este peso de los intermediarios políticos junto con la diversidad de dimensiones de la vida política y la relativa independencia de las esferas de la acción del Estado producen, según la expresión de Daniel Pecaut⁶⁰, la sensación de que la escena política aparece como *una realidad instalada aparte*, con bastante autonomía con respecto a los enfrentamientos de los grupos económicos. Todo este funcionamiento concreto de la vida política colombiana será bastante coherente con la preeminencia de una concepción muy liberal del Estado y de un modelo también liberal de desarrollo que van a ser también característicos de la historia nacional.

El anterior cuadro de conjunto permite enmarcar el carácter urgente que tenía para el grupo lopista la necesidad de modernizar la vida política pero ayuda también a detectar las dificultades enormes que iba a suscitar su esfuerzo. En el fondo, el problema consiste, como muestra Daniel Pecaut⁶¹, en que las clases dominantes no se organizan por intermedio del Estado. Esto tiene implicaciones políticas profundas: estos grupos no van a afirmarse como una burguesía nacional cohe-

59 PECAUT, D., o.c., pp. 108-109.

60 PECAUT, D., o.c., pp. 53-54, 284.

61 PECAUT, D., o.c., p. 126.

rente sino como una yuxtaposición de intereses parciales y heterogéneos, de carácter inmediato, de corto plazo. El Estado no va a representar la coordinación del conjunto de los grupos burgueses en el largo plazo, sino que va a continuar moviéndose dentro del juego de los intereses fragmentarios de las diversas fracciones de la burguesía.

Esta posición se hace patente en el liberalismo económico de los cafeteros, que se empeñan en limitar toda posible interferencia estatal: la Federación de Cafeteros va a convertirse así en "un Estado dentro del Estado" al serle delegado el manejo de la política cafetera general y ciertas funciones de bienestar y seguridad sociales en las zonas cafeteras. Los grupos financieros boicotarán el intento del gobierno de López de convertirla en un instrumento estatal para defender los precios internos y externos del grano a través de la limitación de las exportaciones en concertación con el Brasil (de suyo, la política cafetera del Brasil ya ejercía la función de mantener los precios externos, sin que Colombia tuviera que ocuparse del problema). Además de esto, la adhesión de la burguesía cafetera al liberalismo económico se verá confirmada por el hecho de que los cafeteros no se vieron obligados a apelar a la ayuda estatal en la crisis de 1930, ya que la caída de los precios se vio compensada por el aumento de la cantidad exportada. Más tarde (1943), la Federación descubrirá las ventajas de cierto intervencionismo estatal que compense los problemas causados por la segunda guerra mundial, pero pedirá el regreso al modelo liberal apenas considera que la intervención del Estado ha cumplido ya su misión. Sin embargo, va a seguir aceptando la necesidad de una acción concertada con el Brasil para la defensa de los precios externos (hasta la ruptura reciente del Pacto Cafetero).

Por el lado de los industriales, tampoco se daba mucha oportunidad a una intervención directa del Estado en la economía, dada la concepción limitada que se tenía con respecto a la industrialización y dados los lazos evidentes que existían entre los cafeteros y la industria antioqueña.

Por todo eso, la limitada intervención del Estado durante esta época no basta para convertirlo en agente del desarrollo, como ocurre en otros países iberoamericanos (Méjico,

Brasil). No se forma entonces una nueva elite dirigente, ni surgen nuevos sectores sociales que vinculen su destino a la expansión de las funciones estatales: no aparece una burocracia de clase media ni un ejército con una ideología del intervencionismo del Estado (la debilidad del ejército como actor protagónico de la política ha sido un rasgo característico de la historia colombiana), ni mucho menos un amplio movimiento de masas de corte populista que quiebre los marcos tradicionales de adscripción partidista. Esto se explica más por razones políticas que por motivaciones puramente económicas: por ejemplo, el personal administrativo del Estado sigue reclutándose con criterios partidistas, lo que hace que el Estado permanezca ligado a la lógica de la cultura bipartidista. A su vez, los altos cargos de la política económica del Estado siguen llenándose con dirigentes de los gremios empresariales, lo que hace que los intereses privados sigan prevaleciendo en el seno del propio gobierno. Estos gremios privados se organizan a petición del mismo presidente López, pero su poder va a convertirse en piezas de “un verdadero cogobierno”, al jugar un importante papel en las decisiones estatales de carácter social y económico y llegar a reivindicar incluso, en lugar del Estado, el privilegio de hablar en nombre del interés general⁶².

Pero también el intento de López tenía serias limitaciones en su concepción de la política: es cierto que López ataca a la oligarquía liberal pero lo hace en nombre de la cohesión del Estado, sin romper con el bipartidismo. Las referencias lopistas al pueblo tienden a enfatizar la imagen de unidad nacional por encima de la división de población colombiana en los dos partidos tradicionales pero nunca buscan penetrar en el “pueblo” conservador. Las arengas de López terminaban siempre con tres vivas al partido liberal, lo que significaba la reafirmación del carácter casi imborrable, casi natural, de la división política y social que no se dejaba reducir a las contradicciones de clase, ni al antagonismo populista entre el pueblo y la oligarquía⁶³. Sin embargo, paradójicamente López sostenía que la división bipartidista sólo engañosamen-

62 PECAUT, D., o.c., p. 84.

63 PECAUT, D., o.c., pp. 294-300.

te podía ser asimilada a los conflictos políticos modernos de Europa y Norteamérica: en realidad, el bipartidismo hundía sus raíces en "un inconsciente arcaico" que lo hacía ver como "una división natural de los colombianos", pero no tenía un objeto preciso en los tiempos modernos, puesto que ya habían desaparecido las antiguas diferencias que motivaban las disputas entre los partidos.

A pesar del poco resultado logrado por los intentos modernizantes de López y de lo moderado de sus reformas, éstas van a despertar las resistencias de los propietarios agrarios y de los gremios empresariales. En lo político, la división del partido liberal y la oposición del partido conservador bloquearán los intentos de López: los sectores de la derecha liberal como Juan Lozano y Lozano y los sectores moderados del liberalismo al estilo de Eduardo Santos se mostraban preocupados por la presencia comunista en los sindicatos y por la politización de las masas populares, aunque era claro que López no buscaba crear un frente popular con la izquierda ni un populismo de masas. Sólo pretendía la modernización del Estado y del partido liberal, basándose en una nueva concepción de ciudadanía, más social, que implicaba el reconocimiento del pueblo como sujeto político por intermedio del Estado y un fortalecimiento del Estado como portador de la voluntad colectiva de la nación, por intermedio del pueblo⁶⁵.

En cambio, la oposición conservadora se movía en otra dirección: se basaba en la oposición frontal a la reforma constitucional de López en los campos relacionados con la Iglesia católica y la educación. Dicha reforma en esos aspectos significaba un intento de secularización de la sociedad y del Estado, lo que produjo el resurgimiento del fundamentalismo conservador liderado por Laureano Gómez, cuyo carácter de cruzada religiosa contra la modernidad contribuyó a crear un clima de polarización política que en muchos sentidos preparó el camino a la violencia de mediados de siglo. Esta cruzada religioso-política situaba la lucha política en el terreno de lo no negociable, de lo no susceptible de transacción: era la

64 PECAUT, D., o.c., p. 274.

65 PECAUT, D., o.c., pp. 339-340.

lucha contra el mal, contra el cataclismo moral y social desencadenado por las reformas de López. Esto implicaba el total rechazo a la política moderna de tipo transaccional y la irreconciliable separación de la sociedad colombiana, dividida entre supuestos adversarios y defensores de la civilización cristiana. Se trata de una concepción de política que lo atraviesa todo y se convierte en el criterio de la ortodoxia moral y religiosa⁶⁶.

Laureano Gómez se opone al fundamento secular de la política moderna (pacto social, transaccionalismo, convergencias, acercamientos) en nombre de la política tradicional del siglo XIX, haciendo evidente la creciente separación entre el mundo de los micropoderes de las regiones rurales (mundo del poder político fragmentado, propio de gamonales, caciques y curas de pueblo, más proclives a la intolerancia y la violencia) y el Estado moderno más propio del mundo urbanizado (pluralista, secular, más proclive a la transacción entre los adversarios). Este fundamentalismo conservador se inserta en la división profunda de la jerarquía y del clero colombianos a propósito del Concordato de 1942: Laureano llegará a oponerse al nuncio y al primado del episcopado colombiano, a quienes acusará de transar con el liberalismo francmasón, pero encontrará bastante eco entre sectores del bajo clero, de los jesuitas y de algunos obispos individuales⁶⁷.

Esta concepción maniquea y tradicional de la política también se encontrará en amplios sectores del liberalismo, como denunciará el propio presidente López en su mensaje del 15 de mayo de 1944. Esta mentalidad arcaizante de estos sectores políticos y religiosos contribuye no poco a la autonomía del juego político frente a los intereses de las elites políticas y económicas de ambos partidos.

Otra respuesta al intento de modernización parcial emprendida por López va a ser el movimiento populista de Jorge Eliécer Gaitán, que va a profundizar aún más la división del

66 PECAUT, D., o.c., p. 284.

67 PECAUT, D., o.c., pp. 278-283.

partido liberal en un momento de significativos cambios sociales en el campo y las ciudades, donde cada día se hace más evidente la presencia de "masas peligrosas". La creciente miseria rural incrementa el éxodo campesino a las ciudades, cuya débil industrialización no alcanza a absorber la población excedente y cuyos precarios servicios no tienen la suficiente cobertura para responder a sus necesidades⁶⁸.

El gaitanismo es un populismo de segunda época que surge cuando todavía subsiste entre las masas el recuerdo de los intentos modernizantes de López y de su llamado a la ciudadanía política del pueblo pero ya han desaparecido las correspondientes ideología intervencionista del Estado y la política de reconocimiento a dicha soberanía. Gaitán asume entonces la representación del pueblo pero concibe a éste como una fuerza inerte y primitiva, a la cual hay que empujar a la existencia política y que sólo llega a conformarse como sujeto político a través de la identificación con su carismático caudillo. De ahí la necesidad de la actuación de Gaitán como consejero laboral y vocero político de las masas, que va a producir una intensa movilización política que parece desbordar los marcos estrechos de la política tradicional. Pero esta movilización va a producirse, según Pecaut, al servicio de una estrategia política tradicional, que hace reaparecer el "trasfondo arcaico de la política"⁶⁹.

Por lo demás, el regreso del populismo gaitanista al seno del liberalismo oficial significó la destrucción de la imagen de reunificación del cuerpo social, propia de este populismo. Esta destrucción equivale al regreso al mito de la división política radical entre los partidos tradicionales: se inicia así nuevamente una lucha sin cuartel entre los partidos y se otorga una nueva legitimidad a los voceros tradicionales de ellos.

Así, paradójicamente el intento de modernización parcial del Estado impulsado por López condujo a un mayor encarnizamiento de la lucha política tradicional haciendo evidente la coexistencia de dos lenguajes políticos: la imitación formal del lenguaje de la democracia competitiva se yuxtapo-

68 PECAUT, D., o.c., pp. 335-336, 340-341.

69 PECAUT, D., o.c., p. 483.

ne al carácter arcaico de la base real de la lucha política concreta. El intento de modernización sin romper con la tradición bipartidista no fue suficientemente lejos para crear un espacio público del Estado ni lograr una plena participación popular. Pero la apelación al pueblo y las reformas parciales suscitan desconfianza en los sectores de derecha y de centro. La reacción de los sectores reaccionarios y moderados del partido liberal, el resurgimiento del fundamentalismo conservador, la movilización populista de Gaitán, junto con la debilidad de los sectores populares, van a confluír en un clima de polarización, que va a permitir englobar muchos conflictos bajo el rótulo común de "LA VIOLENCIA".

La oposición de liberales y conservadores obliga a López a decretar una "pausa" en sus intentos reformistas antes de concluir su primer período de gobierno. Su sucesor, Eduardo Santos (1938-1942), continuará esta línea moderada sin abandonar los intentos de convertir al Estado en un árbitro regulador de los conflictos sociales de acuerdo con el interés general. Pero con Santos se acentúa la desconfianza frente a la presencia comunista en los sindicatos y a la movilización popular; sin embargo, tanto el partido comunista como la central sindical CTC continúan apoyando a su gobierno⁷⁰.

Durante el segundo gobierno de López (1942) se hace evidente que su intento de adaptar la democracia restringida a la necesidad de alguna presencia política de nuevos sectores medios y populares (así fuera subordinada) había fracasado. Se continúa hablando de intervencionismo del Estado pero se reduce la acción estatal a su función instrumental; por otra parte, la consolidación de la acción de los gremios empresariales reduce aún más la autonomía del Estado. El gobierno de López va perdiendo el control de la situación política: los escándalos golpean severamente la imagen del gobierno, que debe afrontar un intento de golpe militar en Pasto (1944) y una severa división del partido liberal. Todo esto confluye en el retiro de López de la presidencia y su reemplazo por Alberto Lleras Camargo (julio de 1945).

70 PECAUT, D., o.c., pp. 285, 300, 305.

IX. De la Violencia al Frente Nacional

La división liberal va a conducir al poder al conservatismo con Mariano Ospina Pérez (1946-1950): la debilidad de los sectores sindicales y populares hace que el partido comunista y la CTC sigan apoyando al liberalismo oficialista cuando las masas populares son ampliamente movilizadas por el populismo gaitanista. Ospina intenta gobernar inicialmente con la colaboración del liberalismo en un gobierno de Unión Nacional pero el clima de polarización antes descrito hace fracasar su intento. A este contexto polarizado se sumaron la profunda crisis de las instituciones y el precario control del Estado central sobre las administraciones locales para desencadenar la Violencia generalizada de mediados de siglo.

La Violencia se inicia como un intento de "homogenización política" (conservatización forzada) de algunas regiones donde la competencia partidista era estrecha y no había una hegemonía definida en favor de ninguno de los dos bandos en pugna: en estas regiones, la mayoría liberal no era muy grande, de manera que fácilmente se pensaba que la presión violenta podría expulsar a muchos campesinos liberales y consolidar así el control conservador de la región. Pero estas presiones fueron el detonante que desencadenó una serie de conflictos de diversa índole, que han sido agrupados bajo el nombre genérico de la Violencia. Estos conflictos se generalizan por la mayor parte del país andino, centrándose en las regiones donde se había presentado la mayoría de los conflictos de tierras de los años 1920 y las zonas más recientemente colonizadas (segunda mitad del siglo XIX y primera del XX).

La geografía de la Violencia se superpone a la del café. Así, en la primera etapa de la Violencia (1946-1957) la mayoría de las víctimas se concentra en el Viejo Caldas (sobre todo, en el actual departamento del Quindío, que es la zona más recientemente colonizada), Tolima, Antioquia, Norte de Santander, Santander y Valle (especialmente, la zona del norte). Mucho menos numerosas son las víctimas en Meta, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Bogotá y Cauca. En el resto del país, las víctimas son escasas. El total de víctimas pasa de 180.000 muertos en una población de unos once millones de habitantes.

La violencia tardía (1958-1966) muestra un descenso global y un desplazamiento regional: el total es de 18.000 muertos y el orden de las regiones violentas de mayor a menor se desplaza. El Tolima encabeza la lista, seguido por el Valle, Viejo Caldas, Antioquia, Huila, Santander, Cauca, Cundinamarca, Meta y Boyacá. Esta violencia tardía se concentró en la zona cafetera de la cordillera Central, aumentando en el Valle y disminuyendo en los Santanderes⁷¹.

Paul Oquist, de quien están tomados estos estimativos, centra la explicación de la Violencia en la idea de que el Estado colombiano perdió de tal manera su eficacia hasta el punto de poder hablarse “del derrumbe parcial del mismo”, causado por rivalidades sectarias intensas entre los partidos conservador y liberal, que desencadenaron otra serie de contradicciones socioeconómicas y políticas, de carácter no partidista. Los actores socioeconómicos y sociopolíticos optaron por aplicar directamente sus recursos de poder, incluida la violencia. Por su parte, el Estado no tenía la capacidad de intervenir como tercero en discordia en las disputas entre los grupos no representados en la estructura efectiva del poder. Para Oquist, el derrumbe parcial del Estado se manifestó “en la crisis e inoperancia de las instituciones establecidas, la pérdida de legitimidad del Estado, la apelación del mismo a tácticas terroristas que debilitaron aún más la estructuración social existente, la ausencia física del Estado en grandes regiones del país y las contradicciones dentro del aparato armado del mismo”⁷².

El enfoque de Oquist, acertado en términos generales, parece demasiado optimista en relación con la realidad del Estado antes de que se desencadenara la Violencia. En muchos sentidos, la violencia no hizo sino demostrar la fragmentación del poder que se ocultaba detrás de los partidos políticos de orden nacional y la precariedad de la presencia del Estado en la sociedad, tanto en el sentido geográfico (escaso control de gran parte del territorio nacional) como en un sen-

71 OQUIST, Paul. *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Ed. Banco Popular, Bogotá, 1978, págs. 322. 323.

72 OQUIST, Paul, o.c. pp. 324-325; 327-328.

tido más esencial (espacio público claramente diferenciado de los poderes privados). Esto se manifestó en la carencia del monopolio legítimo de la fuerza y en la incapacidad de constituirse como árbitro por encima de los intereses particulares.

Sólo que la fragmentación del poder y la precariedad del Estado estaban ocultos bajo la estructura supuestamente moderna de los partidos tradicionales, que articulaban entre sí las diversas instancias del poder realmente existente y que relacionaban los aparatos del Estado central con las regiones diversas que componían el país. La Violencia termina por dislocar la imagen de unidad nacional y toda referencia al Estado, porque los grupos locales y regionales de poder terminan por sustituirlo.

Steffen Schmidt muestra la importancia de la estructura del poder político de la violencia, insistiendo en sus bases clientelistas de la violencia⁷³. El mismo Oquist enfatiza la importancia de la estructura local del poder mostrando que donde hubo enfrentamiento entre los gamonales de uno y otro partido, se derrumbó el sistema local de poder y los gamonales perdieron el control de los campesinos y mayordomo de sus fincas. Donde la estructura local de poder se mantuvo unida, como en la costa atlántica, la violencia fue escasa. Oquist señala el caso de Aguadas, (Caldas), rodeada de zonas violentas: allí los jefes locales decidieron unirse para mantener la violencia fuera de sus dominios, mostrando cómo la coherencia local y regional de los grupos dominantes podía compensar una crisis estructural de nivel nacional⁷⁴.

La desarticulación del poder en sus diversos niveles (nacional, regional y local) hace aflorar la fragmentación del poder existente: esto es lo que permite que la Violencia escape al control del Estado y de la clase política de orden nacional. La lucha guerrillera liberal se hace localmente, con poca coordinación con el mundo urbano y bastante desacuerdo con la

73 SCHMIDT, Steffen. "La Violencia revisited: The Clientelist bases at Political Violence in Colombia", *Latin American Studies*, 6, I., 97-111.

74 OQUIST, P., o.c., p. 50.

dirigencia nacional, aunque subsista la alusión al partido liberal como "la sola referencia constitutiva de la identidad colectiva"⁷⁵.

Por otra parte, los conflictos entre guerrillas liberales y comunistas contribuyen a la fragmentación de la resistencia campesina, aunque la Violencia haya sido, en muchos sentidos, una prolongación de las luchas agrarias de 1920-1935. Pero uno de los resultados más notorios de la Violencia fue "un proceso sin precedentes de desorganización del campesinado", que es ahora atomizado y presionado a migrar a las cabeceras municipales y ciudades cercanas⁷⁶. Otro de los resultados de la Violencia, según Pecaut, fue infundir mayor intensidad a la pertenencia a los partidos tradicionales porque la referencia al enfrentamiento entre los dos partidos era la única posibilidad de dar sentido a esta experiencia vivida por toda una generación de colombianos⁷⁷, que hemos quedado profundamente marcados por ese recuerdo.

X. Del Frente Nacional hasta nuestros días

Esta experiencia de la Violencia permite comprender el acuerdo entre los dos partidos para poner fin a la Violencia mediante el reparto del poder entre ellos. El Frente Nacional fue el nombre de este pacto, aprobado por plebiscito en diciembre de 1957, que instituyó por 16 años este poder compartido: los dos partidos se alternarían el poder presidencial y se repartirían en forma paritaria los cargos políticos y administrativos, para volver a fundar el equilibrio y la transacción entre los partidos y recuperar así la legitimidad del conjunto del sistema político.

Este arreglo constituyó la solución de los conflictos políticos que habían caracterizado la vida partidista de Colombia durante todo el siglo XIX y primera mitad del XX consa-

75 PECAUT, D., o.c., p. 565.

76 PECAUT, D., o.c., p. 566.

77 PECAUT, D., o.c., pp. 571-573.

grando institucionalmente el sometimiento del Estado a la lógica de los partidos como federaciones laxas de poderes fragmentados de carácter local y regional. Por otra parte, la Violencia y el Frente Nacional reforzaron el bipartidismo al confirmar la función que los partidos tenían de encuadrar la población de la nación y al desorganizar los sectores populares urbanos y rurales, que quedan privados de toda identidad colectiva distinta de la que otorgaban los partidos tradicionales. También obligaron a la modernización de las redes gamonalcias y a la sofisticación de los mecanismos clientelistas, cuyas ramificaciones locales cubren mejor la mayoría del territorio nacional⁷⁸.

Estos efectos de la Violencia y del Frente Nacional se convirtieron en obstáculos para que los gobiernos de este período logaran tener éxito en otro de los fines que pretendían sus ideólogos más lúcidos: la modernización del Estado. La coalición tan heteróclita de intereses parciales planteaba límites a dicha modernización al imponer su modelo de yuxtaposición de poderes fragmentados en lo económico y en lo político, impidiendo que el Estado pudiera tomar distancia frente a ellos.

El esfuerzo modernizador del Frente Nacional se ve plasmado principalmente en la obra política de Carlos Lleras Restrepo, que ocupó la presidencia entre 1966 y 1970. Su intento modernizante se concretó en la reforma constitucional y administrativa de 1968, en sus políticas de reforma agraria y en su impulso a formas organizativas como la Acción Comunal y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Ya retirado de la presidencia, Lleras emprende una labor de modernización del partido liberal para purificarlo del clientelismo y darle una base más moderna de adscripción mediante la carnetización de sus miembros. Lleras presenta el clientelismo como una corruptela de nuestro sistema democrático, como un rezago de antiguas prácticas corruptas del quehacer político. Pero no percibe que el clientelismo es en buena parte la respuesta de una realidad social basada en la desigualdad de oportunidades frente a una estructura institucional sólo

78 GONZALEZ, F. "Clientelismo y Administración. ", pp. 71-72, 83-89.

formalmente democrática y el mecanismo de identificación colectiva de la mayoría de la población con la vida nacional. El hecho de no captar la naturaleza del clientelismo como sistema primitivo y deformado de seguridad social y como instrumento del sentido de pertenencia a la nación hizo fracasar los intentos de modernización de Lleras Restrepo, que eran casi exclusivamente políticos (carnetización de los miembros, elecciones internas, etc.). La resistencia de la clase política tradicional a sus esfuerzos fue evidente y exitosa, porque respondía a la inercia tradicional del comportamiento político y estaba de acuerdo con la estructura política y social del país⁷⁹.

Las restricciones que el Frente Nacional imponía al juego político democrático al consagrar constitucionalmente el monopolio de los dos partidos tradicionales sobre la vida política nacional ha sido frecuentemente aducidas como explicación de la nueva violencia de los años setenta y ochenta. Las restricciones a la participación política de grupos distintos al conservatismo y liberalismo fueron parcialmente obviadas por el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) y la ANAPO (Alianza Nacional Popular, movimiento populista liderado por el general Rojas Pinilla), que dieron cobertura a la participación de algunos grupos de izquierda. Sin embargo, el cierre de los espacios políticos a grupos diversos de los partidos tradicionales ha sido percibido por la izquierda guerrillera como la justificación de la lucha armada como única vía para construir una verdadera democracia. Algunos analistas como Daniel Pecaú sostienen que la percepción del sistema político como cerrado debe entenderse en el marco de la lucha política por dar un sentido a los hechos de modo que su opción sea legitimada.

En esa línea, Pecaú no cree que las restricciones del Frente Nacional al libre juego político basten para explicar la violencia reciente, aunque reconoce que constituyeron una perversión del lenguaje democrático. Acepta que la democracia es restringida durante el Frente Nacional y después de él, pero insiste en que la sociedad colombiana nunca es tutelada

79 PECAÚ, D., o.c., pp. 571-573.

ni controlada plenamente por el Estado, que continúa manteniendo rasgos del siglo XIX al no estar suficientemente emancipado de las redes de poder privado de la sociedad civil. Insiste en la precariedad de los aparatos estatales (mediocre tecnificación de las instituciones estatales, reducido radio de acción de ellas, interferencias entre el personal político y personal administrativo, incesante intervención de los gremios, etc.), en la fragilidad de la imagen de unidad nacional y en la debilidad de los mecanismos de institucionalización de la esfera política y social, que se refleja en la incapacidad para regular las relaciones sociales⁸⁰. El estado sigue identificándose con las redes del partido (o de los partidos) en el poder. Así, el Frente Nacional se caracterizaría por tener un dominio restringido sobre su contexto político y social: además, debe existir con grupos y espacios que escapan a su control como los mencionados MRL y ANAPO⁸¹.

En conclusión, Pecaut opina que la Violencia bajo el Frente Nacional y a partir de 1977 se explican no tanto por las restricciones que impone el acuerdo bipartidista sino precisamente por los espacios abiertos que deja el Estado, que muestran que la sociedad civil está abandonada a sí misma. Esto hace que las tensiones desemboquen fácilmente en confrontaciones armadas directas de grupos privados: por eso, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda defienden "la combinación de todas las formas de lucha"⁸².

Por otra parte, Pecaut llama la atención sobre los cambios sociales profundos que experimenta la sociedad colombiana durante los últimos treinta años, que producen la ruptura o el debilitamiento de las identidades colectivas de parte de la población con la Iglesia católica y los partidos políticos tradicionales, incluido el comunista⁸³. Esto se evidencia en

80 PECAUT, Daniel. *Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*. Siglo XXI, Bogotá, 1988, p. 16ss.

81 PECAUT, D., o.c., pp. 21-22.

82 PECAUT, D., o.c., pp. 22-23.

83 PECAUT, D., o.c., pp. 25 ss.

rupturas y divisiones internas, que van desde los “curas rebeldes” de Golconda hasta las múltiples escisiones de los grupos de izquierda, que afrontan las mismas tendencias a la fragmentación del poder y la misma crisis de legitimidad que los partidos tradicionales. Los grupos de izquierda se han mostrado incapaces de conformar una alternativa política que pudiera articular a los descontentos del bipartidismo que surgen entre intelectuales, sectores medios y grupos populares.

Muchos analistas han señalado que uno de los cambios más importantes de la sociedad colombiana reciente tiene que ver con el peso de la Iglesia católica en la sociedad, donde se ha producido un acelerado proceso de secularización inimaginable hace unas décadas. Otro de los cambios tiene que ver con la mayor apertura del país a las corrientes intelectuales en boga en el resto del mundo, que se hicieron presentes en el país a raíz de los años 1960. Además, el aumento acelerado de la cobertura del sistema educativo, la creciente profesionalización de las clases medias, la presencia de la mujer en el mundo académico y laboral, la masiva urbanización del país, se combinan también para producir un cambio radical en el ambiente cultural y social del país⁸⁴.

Numerosos jóvenes de las ciudades grandes, medianas y pequeñas tienen acceso a cierto nivel educativo sin que el aparato productivo del país se hubiera ampliado en la proporción suficiente para absorberlos: son condenados a la frustración de sus expectativas y deben contentarse con engrosar el mercado informal de trabajo, quedando sujetos al reclutamiento de la guerrilla o de los grupos de sicarios. Además, el debilitamiento relativo de la clase obrera hace que los empleados públicos terminen por asumir el liderazgo del sindicalismo y que otros sectores populares lideren la protesta urbana⁸⁵.

Todo esto conduce a una profunda crisis de representación, ya que las instituciones existentes van a mostrarse inca-

84 GONZALEZ, F. “Iglesia católica y Estado colombiano (1930-1985)”, en *Nueva historia de Colombia*, Tomo II, Ed. Planeta Colombiana, Bogotá, 1989.

85 PECAUT, D., o.c., pp. 27-28.

paces de regular las transformaciones de la sociedad y no surgen tampoco nuevas formas de institucionalización de los conflictos. La capacidad integradora de los partidos tradicionales ha venido haciendo crisis desde los comienzos del Frente Nacional, pero no han surgido tampoco nuevas agrupaciones políticas capaces de canalizar los problemas. Esta disminución de la capacidad integradora produce una creciente crisis de legitimación, que afecta por igual a todas las agrupaciones políticas, sean de derecha o de izquierda. Esto se refleja en una desinstitucionalización creciente de las luchas sociales, que se manifiestan mediante movimientos cívicos, organizaciones populares, marchas campesinas, paros cívicos, etc. Esta situación es caracterizada por Pecaút como la "informalización" del conjunto de las relaciones sociales, al ampliarse la distancia entre la esfera política y la esfera de la sociedad⁸⁶.

Por todo lo anterior, Pecaút concluye que la violencia posterior a 1980 va mucho más allá de ser una simple continuación ampliada de las violencias anteriores, aunque exista lógicamente una continuidad con ellas. Esta situación inédita no se produjo repentina sino paulatinamente, a través de un proceso gradual en que pueden distinguirse varios momentos. Los primeros índices de la ruptura comienzan a aparecer en la huelga de 1977 y en las reacciones en torno a ella por parte del gobierno, de los generales retirados y de la izquierda, pero es durante la presidencia de Julio César Turbay (1978-1982) cuando ambos bandos profundizan en la decisión de acudir a la solución militar. En una segunda etapa, el objetivo político tiende a predominar sobre el militar: es la primera fase del gobierno de Betancur, con su énfasis en la amnistía y en el gran diálogo nacional. La tercera etapa (1984-1985) corresponde a la expansión de la guerra sucia hasta la toma del Palacio de Justicia: la guerra limitada y subordinada a lo político puede desenfrenarse y hacer explotar los límites políticos, llegando a convertirse en guerra absoluta e ilimitada, que ha sido el período vivido hasta hoy⁸⁷. Sin embargo, hay que señalar que a partir de la matanza de los funcionarios judiciales en La Ro-

86 PECAUT, D., o.c., p. 28.

87 PECAUT, D., o.c., pp. 29-31.

chela se produce un cambio significativo en la actitud del gobierno de Barco frente a la guerra sucia y los grupos paramilitares, que se revelan también como adversarios del propio Estado.

En la fase última, la guerra pierde la racionalidad de medio político en una mezcla inextricable de protagonistas declarados y ejecutantes oficiosos, donde se combinan los objetivos políticos, económicos, sociales y militares, lo mismo que las iniciativas individuales con las colectivas. En ese sentido, Pecaut no cree que el hecho de que más del 90% de los homicidios no correspondan a una motivación directamente política sea tranquilizante: es la prueba de que las acciones políticas están ya inmersas en un complejo juego de interacciones que llegan a borrar las fronteras entre lo político y lo no político. Los sicarios son el símbolo de esa indeferencia-ción⁸⁸.

La hipótesis de Pecaut es que este cambio no se debe a las características excluyentes del Frente Nacional ni a las tensiones sociales de los años 1970 sino a la expansión de la economía de la "droga", que parece capaz de producir una crisis institucional mayor que los protagonistas "normales" de las luchas armadas y de los movimientos sociales. Sin tener un proyecto político explícito, la necesidad de seguridad para sus negocios ha llevado a las mafias a producir un gran impacto en las instituciones del Estado, bastante precarias de por sí, y a profundizar aún más la fragmentación y privatización del poder real⁸⁹.

Además, la presencia de la economía de la droga marca profundamente los enfrentamientos político-militares entre las fuerzas del orden y la guerrilla: el control sobre regiones productoras reforzó el poderío militar de la guerrilla y el impacto de la droga sobre las instituciones proporcionaba una ventaja política adicional a los alzados en armas. La droga también afectó a las Fuerzas Militares y la Policía. La ruptura del inicial *modus vivendi* entre narcos y guerrilla llevó al for-

88 PECAUT, D., o.c., pp. 31-32.

89 PECAUT, D., o.c., pp. 32-33.

talecimiento de los grupos paramilitares de derecha y de las bandas de sicarios, con la colaboración o anuencia tácita de fuerzas políticas de ámbito local, como gamonales tradicionales y mandos subalternos de las Fuerzas Militares⁹⁰.

El resultado de todo eso fue la transformación de los enfrentamientos en una guerra sucia donde los protagonistas oficiales podían actuar a través de actores de reemplazo o "paraprotagonistas", como los llama Pecaut⁹¹. Esto hizo que la violencia fuera adquiriendo autonomía: las complejas interferencias entre los diversos actores y procesos hacen imposible calcular los resultados pues se revelan inadecuados los habituales cálculos políticos y se atenúan las posibilidades de negociación política.

El diagnóstico final de Pecaut no es muy optimista con respecto al inmediato futuro del país, aunque la Violencia no haya producido la polarización total de la sociedad que algunos pronosticaban. Pero señala acertadamente que la apelación a la Violencia produce consecuencias que van mucho más allá de las expectativas e intenciones conscientes de sus protagonistas: mucho más en Colombia, donde "el poder civil deja espacios abiertos y tiene tan poco dominio de la sociedad"; allí la Violencia se difunde rápidamente en todos los recovecos de la vida social, y más aún a medida que se mezclan en ella protagonistas que diluyen las delimitaciones entre lo político y lo no político.

Muestra, además, una importante diferencia entre la actual Violencia y la de los años 1950: antes, las elites políticas podían decidir en cualquier momento dar por terminada la contienda y recurrir a un dictador militar o un acuerdo bipartista. Hoy esto no es posible. Por eso, la conclusión no es esperanzadora: "Colombia podría más bien habituarse a vivir en la crisis, es decir, en una mezcla en dosis variables de procedimientos democráticos y militarización, por una parte, y de conflictos sociales y de violencia, por la otra"⁹².

90 PECAUT, D., o.c., pp. 33-34.

91 PECAUT, D., o.c., p. 34.

92 PECAUT, D., o.c., p. 36.